

Juicio No. 06334-2023-00233

UNIDAD JUDICIAL MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTÓN COLTA.

Colta, miércoles 13 de diciembre del 2023, a las 12h47.

I. ANTECEDENTES.

1.- Abg. Marco Aníbal Angueta Pérez, en mi calidad de juez constitucional, integrante de esa Unidad Judicial Multicompetente del cantón Colta, y reintegrándome en mis funciones y luego de depurar la carga procesal existente en la unidad judicial a mi cargo, señalo. Comparecen los ciudadanos: a). **Elsi Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez** con ci. 0602132755; y, b).- **Fanny del Rocío Abarca Abarca** con ci. 0602180218; quienes interponen acción de protección en contra del ministerio de Educación; La Coordinación Zonal de Educación 3; La Dirección Distrital 06D04 “Colta-Guamote”; por lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado (LOPGE), se ha dispuesto que se cuente con el señor DIRECTOR REGIONAL DE CHIMBORAZO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO.

2.- La causa ha sido presentada en esta judicatura y sorteada conforme a ley (fs. 148). Conocida que fue admitida a trámite (fs. 149); se dispuso se notifique a las autoridades accionadas y a las demás personas requeridas, señalándose día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia se suspende por pedido del ministerio de Educación para remitir información necesaria. Remitida la información se convocó nuevamente a la reinstalación de la audiencia constitucional en la cual se tomó la resolución de **ACEPTAR LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN**. De conformidad al artículo 76 (7) literal 1) de la Constitución de la República del Ecuador, se motiva^[1] como sigue:

II. DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL

3.- Señalan las accionantes en lo esencial. **Elsi Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez** qué:

a).- Ingresó aproximadamente hace 27 años a trabajar para el ministerio de Educación, como colectora 1 del colegio Técnico Agropecuario “Gral. Rumiñahui” del cantón Colta provincia de Chimborazo. Que desde el 9 de enero del 2014 hasta el 27 de febrero del 2019 con acciones de personal Nro. 180-DZTH-CZ23 y No 155-DDTTHH-2016 ejerció por encargo las funciones de **administrador de circuito educativo 06D04C02_a_VILLA LA UNION** del cantón Colta. Indica que con acción de personal Nro. 060-DD-TH-2019, de fecha 27 de febrero del 2019 **de manera extemporánea se efectuó una supuesta legalización del nombramiento de traspaso de puesto y partida presupuestaria** desde el colegio Intercultural Bilingüe “Gral. Rumiñahui” hasta la dirección distrital 06D04-Colta-Guamote-Educación, **la misma que indica regir desde el 1 de septiembre del 2014**. Señala que durante el tiempo en el cual

ejerció sus funciones percibió la remuneración como colector 1, correspondiente al grupo ocupacional SP1 (817,00). Además expone que para el 1 de junio del 2019 la han reclasificado como titular de puesto fijo como administrador de circuito educativo, pasando a ser servidor público 2 (SP2) con una remuneración de USD 901, 00. Finalmente indica que por no encontrarse conforme con esta reclasificación impugnó en la vía legal correspondiente este acto administrativo; la autoridad competente y dentro de la causa Nro. 18803-2019-00396 la reclasificó con una remuneración de 1.676,00 USD que corresponde al grupo ocupacional SP7 grado 13 a partir del 12 de abril de 2022 mediante acción de personal 421-UATH-06D04-2022 permaneciendo hasta la presente fecha en dicho cargo.

4.- En cambio la ciudadana Fanny del Rocío Abarca Abarca, señala:

a).- Que ingresó a trabajar para el ministerio de Educación aproximadamente hace 37 años como Colectora 1 y en 1991 fue nombrada como Colectora 2 del colegio “Duchicela Shiry XII”. Indica que desde el 9 de enero del 2014 hasta el 31 de mayo del 2019 mediante acciones de personal 0183-DZTH-CZ3 y No. 153-DDTH-2016 ejerció por encargo las funciones de administrador del circuito educativo 06D04C03_b-Columbe del cantón Colta. Manifiesta que de manera extemporánea el 27 de febrero del 2019 y mediante acción de personal Nro. 049-DD-TH-2019 se efectuó la legalización del nombramiento de traspaso de puesto y partida presupuestaria del instituto tecnológico superior “Duchcela Shyri XII” hasta la dirección distrital 06D04-Colta-Guamote-Educación, **la misma que indica regir desde el 01 de septiembre del 2014**. Señala que como colectora 2, en todo ese tiempo, percibía la remuneración de SP2 con una remuneración de (901,00 USD). Manifiesta que el 01 de septiembre del 2019 y con acción de personal Nro. 170 fue reclasificada como titular de puesto fijo como administradora de circuito educativo pero manteniendo la misma remuneración de 901,00 USD, por lo que en vista de esta irregularidad accionó la vía contenciosa administrativa, causa signada con el Nro. 18803-2019-00394 donde por orden judicial fue reclasificada con la remuneración de 1676,00 USD correspondiente al grupo ocupacional SP7 grado 13 a partir del 1 de julio del 2021 mediante acción de personal 270-UATH-06D04-2021, permaneciendo en funciones hasta la presente fecha.

5.- Las legitimadas activas señalan que como argumento central que:

“Las acciones de personal con las que nos asignaron funciones de **ADMINISTRADORES DE LOS CIRCUITOS EDUCATIVOS** atentaron contra nuestros derechos de orden constitucional, debido a que al ocupar los puestos antes mencionados que resultaron ser de rango superior a los **desaparecidos puestos** que fuimos titulares por varios años desde nuestro ingreso a la carrera pública, se utilizaron figuras de **ENCARGO Y TRASPASO DE**

PUESTOS DE PARTIDA; sin embargo, dichos movimientos de personal no se hallaban debidamente sustentados en los presupuestos establecidos en los artículos 127 y 37 de la LOSEP y los artículos 2 17 y 69 de su **Reglamento General**, imposibilitando de esta manera a la unidad distrital Financiera realizar la reforma en el DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES y por esa razón estuvimos privados del derecho a percibir la **justa remuneración** que según el MANUAL DE DESCRIPCIÓN, VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN SE HALLA INCLUIDO EN EL SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DE PUESTOS DE SERVICIO PÚBLICO dentro de la resolución número MRL-FI-2012-0640 suscrito por la Viceministra de Servicio Público de aquel entonces, nos correspondía la remuneración de 1.676,00 USD perteneciente al grupo ocupacional SP7 grado 13 para el cargo de ADMINISTRADOR DE CIRCUITO EDUCATIVO **tal como lo hicieron con otros colegas del país** que realizaron las mismas funciones y responsabilidades que las ejecutadas por los comparecientes, razón por la cual no se entiende bajo qué justificación objetiva o bajo qué normativa o criterio técnico nos dieron un trato diferenciado y desproporcionado frente a ellos que conforme acreditamos con los contratos de servicio de ocasionales y los impresos de los print de pantalla del distributivo de remuneraciones tomados de la página de transparencia del Ministerio de Educación adjuntamos a la presente causa, si les cancelaron las remuneraciones que correspondían a los mismos puestos que nosotros veníamos ocupando

6.- Indican en lo esencial que se le está vulnerando su derecho a contar con una remuneración justa, acorde al cargo y a las actividades que se desempeña; la igual de trato y seguridad jurídica.

2.1.- DERECHOS QUE SE CONSIDERAN VULNERADOS

- El derecho al trabajo artículo 33, 326 numerales 4; y 328 de la Constitución de la Republica. (En adelante CRE)
- Derecho a la Seguridad Jurídica Art. 82 CRE y cumplimiento de normas 76.1 y 7 literal 1)
- El derecho a la igualdad y no discriminación, artículo 11 numeral 2 y artículo 66 numeral 4 de la Constitución de la Republica.

2.2.- PRETENSIÓN CONSTITUCIONAL.

- Se declare la violación directa a los siguientes derechos constitucionales: Derecho al Trabajo en su principio Constitucional a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración, derecho a la igualdad y no discriminación; y, derecho a la seguridad

jurídica.

- Se ordene la reparación económica, se ordene el pago de la diferencia salarial de las remuneraciones y más intereses y beneficios de ley.

III.- AUDIENCIA.

PRIMERAS INTERVENCIONES. ACCIONANTES.

7.- Las accionantes, a través de su abogado defensor. Luis Remache señaló:

“Señor juez antes de iniciar mis alegatos en honor al tiempo debo indicar que los actos administrativos que lesionan derechos de orden constitucional de mis patrocinadas se hallan debidamente detalladas en los literales a y b del numeral 3.1 de la acción de protección planteada ante vuestra autoridad. Señor juez asimismo honor al tiempo me voy a referir sólo a los momentos en que se produce en las sesiones de derechos constitucionales ya que los antecedentes están claramente descritos en cada uno de los numerales correspondientes a las accionantes, doy inicio señor juez con Elsi Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez quien ejerció las funciones de administradora de circuito educativo desde el 9 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019, debo indicar que el 27 de febrero de 2019 de manera extemporánea se le hace una supuesta legalización de nombramiento por traspaso de traspaso de puesto y partida presupuestaria sin embargo se dice que rige a partir del 1 de septiembre de 2014, durante todo ese tiempo que ejerció las funciones como administradora de servicio educativo Elsi Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez percibió una remuneración de \$817 que era la que venía percibiendo como colectora uno, posteriormente desde el 1 de junio de 2019 fue titularizada fue reclasificada como administradora de circuito educativo como servidora público dos esto es con una remuneración de 901 dólares al no estar conforme con esa reclasificación mi patrocinada inicia una acción ante la vía contenciosa subjetiva en donde los jueces del contencioso administrativo de la ciudad de Ambato en el juicio número 18803-2019-00396 ordenan que sea reclasificada como servidora público siete a partir del 12 de abril de 2022.- Fanny Rocío Abarca Abarca así mismo es encargada como administradora de circuito educativo desde el 9 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019 de idéntica manera se le hace una supuesta legalización de traspaso de puesto de partida presupuestaria el 27 de febrero de 2019 en donde se dice que dicho nombramiento rige a partir del 1 de septiembre de 2014, durante todo ese tiempo que estuvo encargada como administradora de circuito educativo percibió una remuneración de colectora dos esto es de 901 dólares equivalente a la de servidor público dos; igualmente es reclasificada desde el 1 de junio de 2019 como administradora de circuito educativo titular y así mismo al no estar conforme con esa reclasificación acude ante la vía contencioso administrativa en donde los jueces del tribunal contencioso administrativo de Ambato ordenan a la administración pública que sea reclasificada como servidora público siete a partir del 1 de julio de 2021. Señor juez las acciones de personal con las que se le encargaron las funciones de administradora de circuito educativo y con las que se la se clasificó como servidora público uno atentan contra los derechos de orden constitucional de mis patrocinadas en vista de que pese a que estaban ocupando puestos de rango superior seguían percibiendo una remuneración que no correspondía a las funciones ejercidas y que eran más bien aquella remuneración establecida para aquellos puestos desaparecidos de colectores, si utilizamos las figuras encargo sin embargo no se observó lo que establece el artículo 127 de la Losep ni el artículo 271 de su

reglamento General que en lo principal establece que el pago por encargo se ejecutará a partir de la ejecución del acto administrativo y que las aportaciones al IESS corresponderán al puesto encargado, de esa misma manera señor juez se extienden acciones de personal de supuesta legalización de traspasos de puesto y partida presupuestaria sin embargo la administración pública omite establecer o elaborar los informes técnicos de talento humano y la reforma en el distributivo de remuneraciones tal como ordena el artículo 37 de la Losep y el artículo 69 de su reglamento General razón por la cual al no haberse realizado la reformas en el distributivo de remuneraciones quedaron vedadas de la posibilidad de percibir la remuneración de los puestos encargados cuando el manual de puestos del Ministerio de Educación que fue aprobado a través de la resolución 640 del ministerio de relaciones laborales establece que el administrador de circuito educativo pertenece al grupo ocupacional SP7 grado siete y asimismo la resolución 0022 de fecha 27 de febrero de 2012 suscrita por el ministerio por el ministro de relaciones laborales de aquel entonces establecía que el servidor público 7 grado 13 percibe una remuneración de \$1676 tal como efectivamente otros servidores públicos que ejerciendo las mismas funciones de mis patrocinadas percibieron la remuneración acorde a las funciones que venía desempeñando tal como yo más adelante demostrare con los contratos de servicios ocasionales y con los prints de pantalla descargados de la página de transparencia del Ministerio de Educación donde se puede ingresar al distributivo de remuneraciones, no se entiende señor juez porque a mis patrocinadas se les dio un trato diferenciado contrato que le deja en una situación de desventaja frente a aquellos que percibieron la remuneración que establece el manual de puestos del Ministerio de Educación es por eso señor juez que a mis patrocinadas se les vulneró el derecho al trabajo en el componente de la remuneración justa, el derecho la igualdad y no discriminación, el derecho al debido proceso en la garantía de la motivación y el derecho a la seguridad jurídica, respecto a la vulneración al derecho al trabajo en el componente de la remuneración justa debo indicar señor juez que percibir o ejercer una e una función como administradora de circuito educativo pues no se compadecía con el grado de responsabilidad que este puesto adquiriría ya que no era lo mismo que ser colector que administradora de circuito educativo pues el colector simplemente velaba por una institución educativa en tanto que el administrador de circuito educativo tenía que administrar varias unidades educativas entonces aquí se puede notar señor juez que prácticamente incrementa la carga laboral, incrementa el esfuerzo físico e intelectual y es por esta razón que al ocupar un cargo de mayor envergadura pues lo que le correspondía era percibir la remuneración en relación y en proporción a las funciones encargadas, debo indicar asimismo señor juez que cuando ejercieron las funciones de administrador de circuito educativo el ministerio de educación jamás les proporcionó transporte, un vehículo para poder movilizarse a distintas partes de su jurisdicción ya que en la mayoría de los casos tenía que ir a zonas rurales instituciones educativas de larga distancia incluso exponiendo su integridad física en época de invierno por el difícil acceso que había a esas comunidades educativas tenían que gastar de su propio peculio económico para movilizarse para transportarse a pesar de que hubo un acuerdo ministerial el 055-14 donde disponía a los distritos educativos que se le reconozca la movilización a los administradores circuitales por poco tiempo dos o tres meses y no les cancelaron más ese reconocimiento para los transportes, debo indicar señor juez también que hubieron disposiciones expresas es de planta central en el sentido de que todo ingreso en el distributivo de recomendaciones tenía que guardar concordancia con el manual de puestos del Ministerio de Educación y además hubieron disposiciones expresas que los puestos encargados tenían que ser cancelados al 100% de acuerdo a la función que venían desempeñando esto nunca fue observado por el Ministerio de Educación y para terminar con lo que se relaciona a la vulneración del derecho

al trabajo debo indicar que mis patrocinadas cuando fueron reclasificadas se le se clasifica como servidor público dos es decir pese a que cumplan legalmente los requisitos para percibir la remuneración como servidor público siete la administración pública le reclasifica como titulares como servidor público dos, evidentemente al acudir a la justicia ordinaria la justicia ordinaria les da la razón y ordena que se le se clasifique como servidor público siete es por esa razón que también tienen derecho a percibir una remuneración justa desde el 1 de junio de 2019 que fueron ilegalmente reclasificadas hasta la fecha que efectivamente se les entrega el nombramiento como servidor público siete por orden judicial, respecto a la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación como lo dije anterior mente hubieron otros servidores públicos que ejerciendo las mismas funciones de administradoras de circuito educativo percibieron la remuneración de \$1676 no obstante sin que exista un criterio justificado una justificación válida objetiva, racional, proporcional a mis patrocinadas se le dio un trato diferenciado, debo indicar que respecto a estos procesos y a las salas provinciales tanto de lo civil, como de lo penal, penal militar de la corte Provincial de justicia de Chimborazo se han pronunciado en casos ya idénticos y han determinado que efectivamente ha habido vulneración de derechos constitucionales, respecto a la vulneración al derecho al debido proceso en la garantía de la motivación y a la seguridad jurídica con relación al derecho al debido proceso no se establece en las acciones de personal de encargo ni en alguna notificación las razones por las cuales la administración pública estaba autorizada a cancelar una remuneración inferior a la que le correspondía por encargo que se le había dado por encargo entonces no hay un informe técnico, no existe una directriz donde expresamente se diga que deban percibir una remuneración de los desaparecidos puestos de colectoras, debo indicar señor juez que la administración pública a través del acuerdo ministerial 0006-2014 en su artículo dos disponía a los directores distritales que tenían hasta el 31 de octubre de 2014 realizar los traspasos de puesto y partida presupuestaria sin embargo como indiqué anteriormente recién se acordaron de hacer ese traspaso del puesto y partida presupuestaria en el año 2018 entonces se lo hace de manera extemporánea y sin realizar los informes técnicos que establece la norma para este tipo de movimientos de personal, señor juez el artículo 104 de la Losep establece que la remuneración de los servidores públicos será proporcional a sus funciones y además tiene que observar el principio de ha trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración, nótese señor juez que este artículo 104 de la Losep está directamente relacionado vinculado con lo que establece el artículo 229 de la constitución de la República que dice que la remuneración de los servidores públicos será justa y equitativa y será en relación a sus funciones; respecto a los encargos el artículo 127 de la los se dice en su parte pertinente que el pago por encargo se efectuará a partir de la ejecución del acto administrativo hasta la designación del titular del puesto, el artículo 271 de su reglamento General dice que los aportes alíes serán los que corresponde al juez encargado la disposición general séptima de la Losep establece que ninguna servidora o servidor público podrá percibir una remuneración inferior a la mínima establecida en la escala de remuneraciones mensuales dictadas por el ministerio de relaciones laborales o igual o superior al establecida para el presidente o presidenta de la República, el artículo 252 del reglamento general a la Losep establece que las remuneraciones de los servidores públicos serán únicamente aquella establecidas por las escalas de remuneración dictadas por el ministerio de relaciones laborales, el artículo 227 de la constitución establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficiencia, eficacia, responsabilidad, transparencia, evaluación tal es así que mis patrocinadas ejercieron o realizaron sus funciones de manera eficiente que fueron calificadas con muy buena y además fueron reclasificadas como servidoras público siete, esto en reconocimiento a las funciones

que ejercieron de manera eficaz no obstante durante el tiempo que estuvieron encargadas cumplieron con los principios establecidos en el artículo 227 de la constitución de la República respecto a la administración pública, al servicio de la meditación pública pero no se garantizaron los derechos de las hoy acción antes, por esta razón señor juez pedimos que acepte la acción de protección declarando vulnerado los derechos constitucionales al trabajo, a la igualdad y no discriminación, al debido proceso en la garantía de la motivación y la seguridad jurídica que como reparación económica señor juez pedimos que se ordene el pago de la diferencia salarial, más los beneficios de ley, por haber ejercido las funciones de administradoras circuitales a favor de Elsy Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez a partir del 9 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019 que resultara de la resta de \$1676 y \$817 y a partir del 1 de junio de 2019 hasta el 11 de abril de 2022 que resultará de la resta entre \$1676 y 901 dólares. Para Fanny del Rocío Abarca Abarca a partir del 9 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2021 que resultará de la resta de \$1676 y \$901, señor juez debo indicar ya para concluir o debo solicitar desde ya que se tome en cuenta y se judicialice las pruebas que están descritas en el numeral cinco de la demanda y con su venia puedo describirlas en este momento para en lo posterior producirlas. Señor juez pido que se tome como prueba a nuestro favor copias debidamente certificadas de las acciones de personal la número, señor juez en este momento me voy a permitir producir la prueba señor juez tengo en mi poder la acción de personal la número 0180, tenemos escaneados los documentos no sé si me permite compartir la documentación, conforme se puede apreciar en la pantalla tenemos la acción de personal la número 180- DZTH-CZ3 de fecha 9 de enero de 2014 que rige efectivamente desde el 9 de enero de 2014 como está en su registro, aquí se puede apreciar señor juez que a mi patrocinada Sánchez Ramírez Elsy Lucrecia Guadalupe se le encarga como administradora de circuito educativo y nótese señor juez que aquí incluso se le hace mención en situación actual colectoras servidor público uno, en tanto que situación propuesta está como administrador de circuito educativo pero sigue presidiendo la remuneración de colectoras; de igual manera señor juez tenemos la acción de personal la 171 de fecha 24 de junio de 2019 que rige desde el 1 de junio de 2019 en donde Sánchez Ramírez Elsy Lucrecia Guadalupe es reclasificada pasa a percibir una remuneración que en un inicio era de \$817 a 901 dólares como administradora circuita; tenemos la acción de personal la número 331 UATH-06D04-2022 que exige desde el 1 de agosto de 2022 se puede apreciar señor juez que mi patrocinada es ya reclasificada como administradora de circuito educativo con \$1676 aquí dice administradora circuita servidor público 7 grado 13 en cumplimiento de la sentencia del proceso número 18803-2019-00396, luego tenemos un alcance a la acción de personal anterior y se hace una corrección nótese señor juez que la acción de personal número 331 UATH-06D04-2022 dice que rige desde el 1 de agosto de 2022 luego se hace el correctivo y indica que rige desde el 12 de abril de 2022 mencionando la sentencia número 18803-2019-00396 y reclasificada con \$1676 según situación propuesta, señor juez tenemos asimismo por razón del tiempo producir de un formulario de evaluación como prueba tenemos el formulario de evaluación desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016 de Elsy Lucrecia Guadalupe Sánchez quien es evaluada como administradora circuita y obtiene una calificación de 86.6 muy bueno y en ese mismo orden el resto de evaluaciones, tenemos señor juez la certificación de la historia laboral y se puede apreciar que desde el 9 de enero de 2014 hasta el 31 de mayo de 2019 es administradora de circuito educativo Elsy Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez luego desde el 1 de junio de 2019 hasta el 11 de abril de 2022 administradora de circuito educativo servidor público dos en razón de la sentencia del contencioso administrativo es reclasificada como servidor público siete desde el 12 de abril de 2022 hasta la presente fecha. Respecto a la otra accionante señor juez tenemos aquí

Abarca Abarca Fanny del Rocío es encargada como administradora de circuito educativo desde el 9 de enero de 2014 y así se puede ver en la fecha de registro 9 de enero de 2014 obsérvese señor juez de la misma manera en situación actual colectoras remuneración 901 dólares y en situación propuesta administradora de circuito educativo y con la misma remuneración de colector, luego hay otra acción de personal en donde también se le encarga las funciones de administradora de circuito educativo desde el 26 de agosto de 2016 de igual manera sigue presidiendo la remuneración de 901 dólares la misma que percibía como colectora, aquí tenemos la acción de personal señor juez que es expedida el 27 de febrero de 2019 y dice que rige a partir del 1 de septiembre de 2014 nótese que aquí en esta acción de personal donde supuestamente se legaliza el traspaso del puesto de partida presupuestaria aquí no se hace referencia a ningún informe técnico tal como establece el artículo 37 de la LLOSEP y sigue presidiendo la remuneración de 901 dólares, desde el 1 de junio de 2019 con acción de personal número 170 es reclasificada como \$901 nótese que como colectora venía percibiendo 901 dólares y cuando le reclasificada sigue con 901 dólares, con acción de personal número 270-UATH-06D04-2021 que rige desde el 1 de julio de 2021 se le reclasificada por orden judicial como servidora pública siete con \$1676, se puede apreciar que en la parte explicación dice en cumplimiento de la sentencia del proceso número 18803-2019-00394, tenemos el formulario de evaluación del año 2016 donde es evaluada como administradora circuital y así mismo tiene una calificación de muy buena, tenemos de la misma manera el certificado laboral otorgado por el Ministerio de Educación el día 28 de febrero de 2023 y dice que desde el 9 de enero de 2014 hasta el 30 de junio de 2021 era administradora de circuito educativo luego desde el 1 de julio de 2021 es servidor público siete administradora circuital, señor juez hemos agregado al proceso la resolución número 2012-0021 en donde establece que el servidor público 7 grado 13 percibe una remuneración de \$1676, tenemos así mismo la resolución 0640 donde se puede apreciar en su parte pertinente que el administrador de circuito educativo es servidor público siete grado 13, señor juez hemos agregado también al proceso sentencias en este caso en razón del tiempo la dictada por la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la corte Provincial de justicia de Chimborazo dentro de la acción de protección 06334-2023-00003, en su parte pertinente la corte han tomado en cuenta ha valorado un certificado o una circular que nosotros más adelante produciremos la circular número MINEDUC-CGAF-2015-00037-C de fecha 27 de febrero y en su parte pertinente, a los accionante se les ha vulnerado su derecho constitucional en lo referente a la igualdad formal y material, así como el derecho al trabajo en lo relativo a las remuneración justa, se advierte el trato diferente ya que desempeñaban los mismos trabajos que los otros y por el que han recibido una remuneración menor un tratamiento injusto y a pesar incluso de que por medio existe el oficio circular número ministerial MINEDUC-CGAF-2015-00037 de fecha 27 de febrero de 2015; en el proceso constan el impreso del distributivo de print de pantalla y asimismo por razones del tiempo debo indicar el caso del señor lo Llor Molina Guillermo Rafael como administrador del circuito educativo quien percibe o percibió las remuneración de \$1676; en el proceso consta la circular número MINEDUC-CGAF-2014-00043-C de fecha 22 de mayo de 2014 que en su parte pertinente dice: todo ingreso de servidores al distributivo de remuneraciones tiene que estar de acuerdo al manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del Ministerio de Educación por lo que las denominaciones de los puestos deben guardar concordancia con este manual, así mismo hemos adjuntado al proceso copia debidamente certificadas de tres contratos de servicios ocasionales bueno en razón del tiempo asimismo voy a producir aquella que ha sido suscrita por Luis Ernesto Barrionuevo Bravo en cuya cláusula cuarta establecen que se le pagará una remuneración mensual de \$1676 en calidad es

servidor público 7, y en la cláusula tercera dice que deberá desarrollar actividades y tareas acorde al puesto detallado como administrador circuital de la dirección distrital 01G06 El Pan Cevilla El Oro educación. Señor juez ya concluyó tenemos aquí la famosa circular número MINEDUC-CGAF-2015-00037-C que ha sido valorado tanto por la corte por la Sala de lo civil y mercantil, como la sala de lo penal de la corte Provincial de justicia de Chimborazo mire en su numeral cuatro lo que dice, la reforma por encargo en el año 2014 se debe ingresar para pagar los valores pendientes de pago del año 2014 para lo cual se recuerda que la reforma por encargo consiste en realizar el pago total por el encargo realizado de la siguiente manera: cancelar el valor de la partida asignada al beneficiario y el valor faltante cancelar con la partida del encargo de tal manera que sumada las dos partidas en un 100% que el beneficiario debe recibir por el encargo realizado, por ejemplo en cargos directivos, establecimientos, jefaturas y niveles jerárquicos superiores administrativos y otros de existir, concluyó señor juez un caso análogo que fue conocido por la corte constitucional la sentencia número 578-16-Ep/21 en su parte pertinente dice: Zoila Irene Mosquera Cárdenas ha sido servidora pública del ministerio educación durante varios años desempeñó las funciones de colectora del colegio Alejandro Andrade de la localidad de Giron, provincia del Azuay, el 11 de febrero de 2015 las autoridades ordenaron el traslado administrativo hacia la sede ubicada en el distrito educación de Santa Isabel como parte de la optimización y reorganización del talento humano y en su parte pertinente en su acápite 14 lo que dice la corte constitucional, en virtud de los derechos constitucionales alegados por el accionante los jueces provinciales realizaron el análisis del acto impugnado considerando las normas y reglamentos aplicables al considerar que la servidora pública no aceptó el cambio propuesto no existió el informe de la unidad administrativa de talento humano ni tampoco se constató la reforma al distributivo de remuneraciones mensuales concluyeron que se vulneró el derecho al debido proceso, **con este argumento la corte desestima la acción extraordinaria de protección planteada por el Ministerio de Educación.**

8.- PRIMER INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN representado por el Dr. Jaime Chicaiza procurador judicial del ministerio de Educación, y coordinadora de educación zonal 3, y por el señor director distrital Colta-Guamote.

“Señoría bajo su venia procedo con mis alegatos conforme lo determina el artículo 14 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales, señoría la defensa técnica de los legitimados activos ha señalado un sin número de derechos constitucionales que presuntamente esta cartera de Estado ha inobservado en estos ha manifestado el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad jurídica, el derecho al debido proceso y el derecho a la igualdad y no discriminación, su señoría hay que tener hay que partir de una primicia esencial la cartera de Estado el Ministerio de Educación ha cumplido con sus obligaciones de su veneración a la legítima activas y las ha cancelado conforme las actividades que desempeñaron en su tiempo, hay que recordar que el principio de igual trabajo igual remuneración se basa en razón a las funciones que cada una de las legitimadas activas anteriormente para percibir dicha remuneración también hay que recordar su señoría que ya existe un pronunciamiento del contencioso administrativo que la misma defensa técnica ha manifestado en el cual el contencioso administrativo dentro de sus sentencias ha señalado que sus remuneración debe de ser percibida era de \$1676 pero más no les otorgaba el derecho a las remuneraciones anteriores que no percibían, el contencioso administrativo ya se pronunció sobre ese sentido su señoría.

El juzgador pide aclaraciones en relación a la presente causa en el sentido de: Mi doctor Chicaiza, con todo el respeto y el comedimiento debido, yo conozco de los hechos, conozco de las causas, quisiera mejor para ser más tutelar y con centralidad, sólo indíqueme tal vez e insisto que quede registrado, no le estoy mermando el derecho a la palabra ni el derecho la defensa; por qué debería cambiarse el criterio de las dos Salas Provinciales que por unanimidad han aceptado este tipo de acciones con los mismos patrones fácticos, con los mismos hechos y además resueltos por el suscrito o, indíqueme, cuál de las salas ha cambiado el criterio. Procuraduría de igual forma también sabe lo mismo, Procuraduría con la misma doctora si no me equivoco Pumagualli también conoce de esos hechos, entonces yo si quisiera que me diga cuál es su argumento que va hacer variar el pensamiento del operador de justicia y el pensamiento de la alta corte de las dos salas que ya han tenido su pronunciamiento ante este tipo de hechos

Ante esta inquietud y requerimiento el Dr. Jaime Rigoberto Chicaiza, señala:

“Gracias señor juez, en razón a lo señalado por su señoría esta cartera de Estado se basa especialmente en las funciones que se realizaban anteriormente las legitimadas activas, que no eran las funciones de circuitales de manera adecuada dentro del distrito educativo por lo cual su señoría como las anteriores acciones de protección solicitaría para que esta cartera de Estado adjunte los informes técnicos de las funciones que realizaban anteriormente las legitimadas activas, con esos informes técnicos se podría modificar el criterio como usted con juzgado su señoría.-

Operador de justicia consulta: ¿Y no hay de las salas de la corte Provincial de aquí de Chimborazo ningún criterio diferente?

Dr. Jaime Rigoberto Chicaiza, señala:

“Tenemos una sentencia de la sala de Tungurahua por lo cual vuelvo a recalcar que se solicita se abra un término de prueba se abra el término de prueba para nosotros poder adjuntar dicho pronunciamiento de la sala de Tungurahua.-

Operador de justicia consulta: ¿En materia constitucional o justicia ordinaria?

Dr. Jaime Rigoberto Chicaiza, señala:

“En materia constitucional”

9.- PRIMERA INTERVENCIÓN de la Procuraduría General del Estado:

“Procuraduría solicitaríamos que se abra la causa prueba en el sentido de que se ha referido de que no han existido los informes debidamente justificados por parte de la administración pública y en ese sentido si sería necesario que su autoridad tenga conocimiento de todo el expediente administrativo de cada una de las funcionarias y como efectivamente la administración llevó a cabo tanto estos encargos, como los traslados administrativos que también ha hecho referencia dentro de esta audiencia para que efectivamente su autoridad vislumbre si existió o no existió una vulneración de derechos constitucionales hacia las hoy

accionantes.-

Operador de justicia consulta: PGE me puede manifestar si es que conoce de alguna causa con el mismo patrón fáctico en el cual se haya cambiado el criterio de las Cortes Superiores de esta provincia, ¿Conoce de alguna que me pueda señalar?

Dra. Maria Fernanda Pumagualli:

“Dentro de la provincia **no señor juez, no, no tengo conocimiento** en cuanto a los mismos hechos que se hayan debatido en una acción de protección que existe un pronunciamiento distinto por parte de las salas de la corte provincia de Chimborazo”

RÉPLICAS Y CONTRARRÉPLICAS

10.- Los legitimados pasivos señalaron: El ministerio de Educación en la reinstalación de la audiencia también compareció el Dr. Andrés Velastegui, quien señaló:

“Debo mencionar a usted señor **juez que en razón usted no es el juez competente en razón de materia por conocer la presentación en virtud de lo siguiente.** Dentro de la presentación acción de protección planteada por la señora Sánchez Ramírez Elsi Lucrecia Guadalupe y la señora Abarca Abarca Fanny del Rocío en contra del ministerio Educación la que se debe se debe declara improcedente por cuanto no reúne los requisitos establecidos en el artículo 86 y 88 de la constitución de la República del Ecuador y de los artículos 39, 40, 42 de la (LOGJCC), esto es acorde a lo mencionado en el numeral uno de la violación del derecho constitucional, debo mencionar que la Corte Constitucional sobre acciones de protección ha señalado que la acción de protección es una garantía idónea y eficaz que procede cuando el juez efectivamente verifica una real vulneración de derechos constitucionales, con lo cual no existe otra vía de tutela de esto derechos, o sea que no sean garantizados a través de la garantías jurisdiccionales, también debo mencionar que no todas las vulneraciones al ordenamiento jurídico necesariamente tiene cabida en el debate o en la esfera constitucional, ya que estos conflictos en materia de legalidad, **existen vías idóneas y eficaces dentro de la jurisdicción ordinaria tales esto lo establece la sentencia 016- 13 cc de 16 de mayo de 2013 en el caso 1000-12-p en el cual nos establece que en estos casos como son materia laboral, diferenciación de pagos o de remuneración no pagadas, la vía a agotarse administrativamente es la vía laboral en este caso sería con el contencioso. Además no cumple con el numeral tres,** que es la inexistencia de otro mecanismo judicial adecuado y eficaz para proteger el derecho violentado, debo hacer mención que mientras en la sentencia 065-13-C-CC del caso 11-44-10-EP, sostiene que el juez al asumir una acción de garantías jurisdiccionales de derechos, ineludiblemente debe reflexionar y discernir si el caso sometido a su conocimiento y su resolución no estén amparados en otro tipo de acción o mecanismo de defensa judicial, es decir corresponde disuadir si hay siete niveles de legalidad y de constitucional, señor juez debo mencionar que en esos aspectos no son índole o aspectos constitucionales sino de legalidad con los cuales existen vías idóneas, los cuales las accionantes pueden hacer uso legítimo y legal de estos medios, tal es así que la doctora Karla Andrade Quevedo en su artículo la acción de protección desde la jurisprudencia constitucional, tomando del manual de justicia constitucional, ecuatoriana en la página 129 refiere que la acción de protección y se remita la sentencia constitucional 016-13-C-CC del 16 de mayo de 2013 expresa que, queda descartada por tanto toda posibilidad que la acción

de protección sea procedente para resolver asuntos de estricta legalidad o que constituyan una vía para conocer y resolver aplicaciones o cumplimiento de disposiciones infra constitucionales o contractuales, cualquiera que sea su naturaleza para el ordenamiento a previsto acciones ordinarias, el orden jurídico consta de procesos determinados sean civiles, penales, laborales, en este caso contenciosos administrativos y laborales que permite la resolución de los conflictos jurídicos en cuanto a la materia, tanto es así que los jueces de garantías constitucionales, de instancia han resuelto pretensiones que se relacionaban con otras garantías jurisdiccionales la Corte Constitucional ya se ha señalado que debe ser inadmitidas al inicio debido a que con sólo la admisión se desvirtuar la naturaleza y efectos propios de la acción de protección esto lo tenemos en varias sentencias como es la sentencia 031-09-SEP-CC, en el caso 0485- 09-EP, de 24 de noviembre del 2009, es así que pretender quitar el ámbito de una legalidad o determinado asunto en este caso laboral y llevar a la categoría de garantía jurisdiccional. Señor juez está quitando el despropósito y desnaturaliza la esencia de la acción de protección, es así que la Corte Constitucional se establece en la sentencia 1679-12-EP/20 del 15 de enero de 2020 la Corte Constitucional en su parte pertinente en la foja 14 párrafo 65 y 66 de la sentencia mencionada nos dice, y cito textualmente señor juez, **que adicional de la vista de la mayoría de los conflictos laborales quieren probar una serie de hechos usualmente relacionados a la fecha de inicio una relación laboral, duración de dicha relación remuneración que perciban o que percibía el trabajador estos procesos pueden requerir un mayor espacio de práctica de contradicción de la prueba aquel permitido en el trámite de la acción de protección, esto implica que cuando las alegaciones planteadas en estos casos concretos se ha diseñado se determina el diseño procesal es el juicio laboral ordinario por un medio procesal más adecuado para la tutela de derechos supuestamente vulnerado en la medida en la que presta facilidad para mayor debate contradicción y prácticas de prueba, entonces por lo anterior menciona y dispone que las discusiones de índole estrictamente laborales tales como el pago de remuneraciones adeudadas y otro tipo de haberes laborales que es el caso central de esta presentación de protección nos dice que por regla general el conflicto, cuya sea el reconocimiento de haberes laborales cuenta con una vía adecuada y eficaz ante la justicia ordinaria**, es así que como regla general la acción de protección no puede sustituir la vía laboral ordinaria y en estos casos usted señor juez como garantista de la ley conocedor de la misma los jueces constitucionales deben dirigir a la accionante a la vía adecuada y eficaz para resolver su pretensión más no realizarla en ámbito de garantías jurisdiccionales con la acción de protección una vez de que haya intervenido y mencionado todo este aspecto que porque no es pertinente conocer o iniciar lo que es una acción de protección en estos aspectos otorgó me permito un poco la palabra el doctor Rigoberto para que él pueda hacer acotación de las pruebas de las sentencias que la ingresó oportunamente a su Autoridad y posterior a ello que se le otorgue la palabra para usted pueda realizar las preguntas pertinentes al caso si en caso de que existiera alguna duda al compañero especialista de talento humano muchas gracias señor juez”

11.- El ministerio de Educación también estuvo representado por el Dr. Rigoberto Chicaiza, quien también señaló:

“Su señoría esta cartera de Estado **ha presentado tres sentencias constitucionales emitidas por las distintas salas**, primeramente por la sala de lo Provincial de Pichincha y la sala de la Corte constitucional también y también por la Sala Especializada Mercantil de la provincia de Cotopaxi, **quiero hacer énfasis especialmente de la sala mercantil de la corte Provincial**

de Cotopaxi. Su señoría la Corte Provincial de Cotopaxi se ha pronunciado sobre un hecho similar y análogo sobre estos aspectos de la acción de protección ahorita analizados, especialmente su señoría, es la sentencia que se ha presentado el 12 de octubre de 2023 de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi, **en el cual funcionarios del distrito Pangua que están solicitando que se le pague sus valores desde el 2014 al 2019 en el cual fungían como circuitales y la sala mercantil acepta la apelación del distrito educativo Pangua-Educación en el cual determinan que no es la vía idónea para la exigencia de derechos laborales y es un hecho similar el que está conociendo su autoridad su señoría...**procedo a dar lectura los puntos, 5.4 y 5.5 que la Sala Mercantil de Cotopaxi hace mención su señoría...en el párrafo 14.5 **de la sentencia 17 63-12-EP-20 señala que las transgresiones de la normativa que tengan como esencia aspectos laborales como esencia en aspectos laborales deben considerarse y deben ser analizados dentro del ámbito del derecho ordinario más no en el ámbito del espera constitucional su señoría,** de la misma manera los jueces de la corte Provincial determinan que para el reconocimiento de los derechos de los trabajadores y equiparar su situación a lado de su empleador se debe analizar dentro de la esfera ordinaria esto es ante un juez de lo laboral puesto que puede hacer un análisis más adecuado y profundo sobre los aspectos solicitaciones de pago es remuneraciones adecuadas por lo cual esta sala especializada de lo mercantil determina aceptar la acción de la apelación a la acción de protección presentada por el distrito educativo Pangua-Educación en razón de que para el análisis de equiparar o solicitar los pagos no percibidos por una servidora pública debe haber sido conocido en esferas ordinarias esto es en el ámbito laboral. Su señoría dentro de la sentencia emitida por la corte Provincial de mercantil de la provincia de Cotopaxi hace mención especialmente a lo que establece el numeral cuatro del artículo 42 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales que señala que; **el reclamar mediante acción de protección las diferencias salariales no percibidas durante el tiempo que prestó sus servicios por el cargo temporal como administradora de circuito educativo es un conflicto que debe ser analizado en espera de justicia ordinaria toda vez que como ya se ha referido la acción de protección está para proteger y evitar vulneraciones de derechos fundamentales esenciales más no para tratar temas de orden legal** en consecuencia al tampoco haberse identificado la existencia de una violación de derecho constitucional este tribunal tiene bien aceptar la acción de protección, y señoría esta sentencia fue puesto en conocimiento de su despacho, por lo cual solicito bajo su venía, con el debido respeto del mismo, se proceda a analizar puntos esenciales, puesto que son los mismos argumentos presentados ante la acción de protección a su despacho que fueron presentados en el distrito de Pangua- Educación, su señoría los Jueces de la Corte de la Sala Mercantil hacen mención también sobre el presunto derecho vulnerado al trabajo de igual valor corresponderá a igual remuneración su señoría, los jueces de la Sala Mercantil vuelve a recalcar que, para un análisis adecuado sobre el trabajo de igual valor corresponderá a la anual remuneración conocer a un juez de lo laboral puesto que las pruebas evidentes para garantizar su derecho de manera adecuada se lo debe hacer de manera profunda y más no bajo una espera constitucional, **también de la misma manera su señoría en el punto 7.6 sobre el derecho al trabajo los jueces de la sala mercantil señalan que de acuerdo a la declaración Universal de los derechos humanos en el artículo 23 numeral uno consagrados señala que, toda persona tiene derecho al trabajo a la libertad de elección de su trabajo y a las condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el empleador sin embargo este derecho debe ser precautelar por los jueces laborales o jueces debidamente designados por el Estado,** señoría sobre la prestación de

puestos de servicio público dentro de la resolución número tal que le correspondía percibir una remuneración 1676 el grupo ocasional SP7 lo que ha sido aceptado por el juez de primer nivel no era procedente puesto que los derechos laborales deben ser conocidos ante un juez laboral y hacer un análisis más profundo su señoría esto se encuentra debidamente analizado en el 7.5 sobre la seguridad jurídica su señoría por lo cual hasta que mi intervención su señoría devuelvo la palabra y **solicito bajo su venia se le otorgue la palabra al técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano.**

11.- Como prueba de descargo se le escuchó al técnico de la Dirección Nacional de Talento Humano del ministerio de Educación ING. ANGEL VIRGILIO DOMINGUEZ VALLEJO, quien señaló:

“...El ministerio de Educación entró en reestructura en el año 2012, ahí se aplicó el estatuto y el manual, se publicó el estatuto y el manual de puestos pertinentes, bajo esas premisas se emitió el acuerdo ministerial número MINEDUC-ME-2014-0006-A del 4 de junio de 2014, continuó señor juez, entonces como le indicaba ese acuerdo ministerial dispone a todos los entes desconcentrados que están regentados por el ministerio de Educación absorber personal de las instituciones educativas a sus distritos para que ejerzan las actividades según corresponda en la estructura, bajo esos parámetros se absorbieron a colectores, inspectores que estaban regentados bajo la LOSEP al distrito educativo para que ejerzan ya sea las actividades de analista de talento humano, de administrador de circuito educativo, de analista financiero dependiendo de la especialidad y la necesidad que tenga en ese momento la institución desconcentrada, con esos argumentos emitieron acciones de personal a cada uno de ellos reconociéndoles el traspaso de puesto y partida de esas personas al distrito educativo para que con ese primer acto administrativo se les pueda implementar el manual de puestos porque si no se tomaban bajo esos parámetros técnicos de implementación estaríamos violentando lo que es el artículo 228 de la Constitución, con ese antecedente se emitieron las diferentes acciones de personal a los diferentes actores que participaron en la implementación del manual de puestos, dentro de ellos lógicamente están los ahora accionantes, que en su caso, el uno, era colector, que en el otro caso era también colector, lo que en los dos casos eran colectores del colegio y pasaron al distrito ese acto administrativo se les legalizó con acciones de personal del 2019 para poder implementar el manual de puestos, **si no teníamos ese instrumento técnico no podíamos implementar el manual con ese instrumento técnico todos los funcionarios se presentaron en tres fases, como esta implementación se hizo a nivel nacional se hizo en tres fases diferentes, en el caso de los accionantes, las accionantes implementaron una segunda fase que se ejecutó en el año 2019,** presentaron los documentos pertinentes, y ellos libre y voluntariamente accedieron a la denominación de puesto de administrador de circuito educativo, bajo esos parámetros el ente rector, que es del ministerio de Trabajo, emitió políticas de ubicación justamente para poder precautelar todos los derechos de los participantes, en qué sentido, de que sean reconocidos sus títulos, se han reconocido su experiencia dentro del puesto al que estaban postulando, bajo esas premisas el ministerio de Trabajo conjuntamente con el ministerio de Educación hizo los estudios pertinentes de la documentación que cada interesado libre y voluntariamente presentó para el estudio pertinente, dentro del estudio lógicamente cada participante tenía limitantes o agravantes o atenuantes para acceder al puesto al cual estaba participando, **específicamente en el caso de los accionantes los accionantes no cumplieron con el área de conocimiento que exige el perfil del puesto, razón por la cual no fueron considerados como servidores públicos siete con grado 13 conforme lo estipula el perfil de puesto de administrador de**

circuito educativo, sin embargo se les puso como administradores de circuito educativo si porque ellos aplicaron para eso y se les aplicó las políticas de ubicación que el ente rector aprobó para este proceso técnico, en el caso de los accionantes en buena o mala hora se les aplica la misma política de ubicación que dice textualmente me permite por favor: que se les aplica la política 5.1 que es derivada de la política cinco, la política cinco dice las y los servidores que ocupan puestos que se requieran título de tercer nivel y ostenten instrucción formal de tercer nivel y que no sea afín al requerido en la descripción y perfil de puesto se les ubicará en el grado de valoración que inicie de serie de los puestos donde se requiere que estudios concluidos de tercer nivel siempre y cuando cuenten con experiencia requerida para el puesto y la 5.1 en el caso de no existir un grado de valoración de arranque dentro de la serie de puesto se les ubicará en el grado de valoración que la norma técnica del subsistema de clasificación de puestos establece para puestos donde se exige requisitos de instrucción formal de tercer nivel siendo este el servidor público 2, con esta política es la que técnicamente se les ubica a las dos accionantes y se le está el nombramiento de administradores de circuito educativo como servidores públicos dos, con esto en ningún momento se vulneraron derechos técnicos a los accionantes se le reconoció tal cual como el ente rector nos dispuso mediante sus políticas y es más ese reconocimiento está en una resolución del ministerio del Trabajo, permítame por favor la resolución del ministerio del Trabajo en el que están inmersos los accionantes es la resolución, la resolución MDT-SF-SP-2019-024 del año 2019 exactamente de la fecha 17 de junio de 2019, con esa resolución el Ministerio de Trabajo da por concluido el estudio técnico para que pase a la parte ya formal del otorgamiento de nuevo nombramiento que ese nuevo nombramiento les dio justamente la dirección distrital en donde están laborando y deben tener el nombramiento y es más debe estar percibiendo el sueldo correspondiente con eso le aclaro que en ningún momento se les ha violado el derecho a participar en este tipo de procesos que el ente rector nos dispuso en su momento...”

Preguntas del doctor Andrés Velástegui, defensor técnico el Ministerio de Educación pregunta al ingeniero Ángel Virgilio Domínguez Vallejo:

“**Pregunta.-** Por qué no se les puede pagar este ámbito retroactivo que solicitan los accionantes.- **Responde.-** Señor juez, como le indiqué el principio de mi intervención los accionantes legalizaron su situación con las acciones de personal de traspaso de puesto y partida como manifesté inicialmente, **ellos antes de trabajar la dirección distrital eran colectores de instituciones educativas en base al acuerdo ministerial que hice mención, la autoridad de territorio les trajo a laborar en diferentes actividades no necesariamente en actividades de administradores de circuito educativo, no necesariamente en actividades de analistas de talento humano o algo similar dentro del distrito**, en el momento de que el ministerio de Trabajo que es el ente rector nos dispuso ya la implementación del manual de puestos después de que ya se implementó el nuevo modelo de gestión del ministerio de Educación procedimos de forma inmediata con el proceso que le expliqué señor juez y por eso es de que a partir de que el ente rector, que es el único que puede reconocer que un servidor público tenga un sueldo diferente, a partir de esa resolución es que están recibiendo actualmente el sueldo que les corresponde.-

La defensa de las legitimadas activas preguntó:

“Diga el preguntado que al momento de hacer la legalización de traspasos de puesto y partida

presupuestaria, se emitieron los informes técnicos correspondientes como establece el artículo 37 de la Losp y el artículo 69 de su reglamento General.-**Responde.-** Ante la inquietud, estábamos en un proceso de implementación del nuevo modelo de gestión del ministerio de Educación, el nuevo modelo de gestión del ministerio de Educación es a nivel nacional no es exclusivo de determinado territorio, en base de implementación es que se ejecutó el acuerdo ministerial en base de ese acuerdo ministerial es que se ejecutó las acciones de personal a las cuales hice referencia.-

El operador de justicia pide una aclaración:

“Usted me está haciendo un informe general, y yo le estoy señalando de las ciudadanas, me informa bajo ese acontecimiento que no cumplen el perfil, si no cumplían el perfil, si no cumplían inicialmente el perfil, por qué no se contrató a personas como también está justificado en este proceso que a nivel nacional se contrataron a personas ostentando el cargo y ostentando la remuneración que percibe.- **Responde.-** Como le indicaba en mi intervención, **no es que se les encargaba, se les asignaba diferentes actividades**, en el caso puntual de lo que usted me manifiesta, **se les asignó las actividades de administradores de circuito educativo**, sin embargo de que presupuestariamente todavía no estaban dentro del distrito, no estaba legalmente dentro del distrito técnicamente hablando, **por eso es de que primero se les legaliza para que estén dentro del distrito para en base de eso ahí sí el ente rector pueda decir ya están dentro del distrito, ejecútase el manual de puestos, por eso es de que se les reconoce conforme lo manifestado en la segunda fase del implementación con la resolución que le mencioné en mi intervención.-** **Pregunta.-** Si es que no cumplían el perfil, si es que no se les canceló el valor como administradores circuito, pero hacían las funciones aquellas, quien cumplía con esa labor.- **Responde.** Señor juez como le indicaba, debían cumplir al 100% el perfil del puesto.- **Pregunta.-** No, no, mi pregunta, escuche, mi pregunta es cerrada, sí o no, verdadero o falso, en el momento que se realizaban esas acciones, ninguna otra persona, **ningún otro funcionario realizaba ese tipo de acción, verdad.** A tanta insistiendo y aclaración responde.- **A los que se les asignaron nada más, no a todos, hasta los que se les asignaba esas actividades.-** **Pregunta.-** Tendrían que cumplir las atribuciones de administrador circuital no había nadie más que realice, verdad.- **Responde.-** A las personas que se les asignaba esas actividades, no las funciones, las Actividades, porque las funciones se las justifica con nombramiento permanente.- **Pregunta.-** Jurídicamente no me está solventando ningún tipo de aclaración, pero me está haciendo entender qué cómo le indico, está justificado documentalmente por el ministerio de Educación que realizaban bajo acciones de personal el cargo de administrador de circuito, ahora también existe una reclasificación justo estoy hablando de la señora licenciada Elsi Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez, tal vez no tenga esa información a la mano, pero le indico, existió una reclasificación de la ciudadana porque al existir una reclasificación no se le otorgó de igual forma la remuneración que correspondía a la del servidor público siete y tuvo que mediante sentencia bajo todo lo que usted me dice, sus informes técnicos, luego mediante sentencia se le otorga ya la remuneración justa y equitativa de 1676, si usted hace referencia que las reclasificaciones y bajo sus normas técnicas bajo lo que usted hace referencia si tuvo este tipo de acontecimiento la ciudadana porque se le reclasifica en el año 2019 como usted mediante esa directriz resolución del ministerio de Trabajo el 17 de junio de 2019 hizo referencia el tribunal contencioso administrativo le da la razón y mediante normativa percibe la remuneración de servidor público siete, entonces cuál es el desfase en su informe que me puede decir oralmente bajo los señores jueces de lo contencioso en que

erraron según usted.- **Responde.-** Debo entender que la persona a la que usted se refiere el momento que se hizo el análisis no tenía sus títulos pertinentes por eso no se lo ubicó como tal después debo entender de que la persona a la que usted hace referencia presentó los títulos correspondientes y ahí lógicamente el Ministerio de Trabajo tomando en consideración los títulos presentados le puso en la remuneración que usted manifiesta.-

Evacuado el testimonio de la Dirección Nacional de Talento Humano del ministerio de Educación; La legitimación activa dijo:

“Después de haber escuchado la intervención del ministerio de Educación queda claro que primero no ha presentado una justificación objetiva del por qué se les dio un trato diferenciado a mis patrocinadas. **Se dice varias veces que no cumplían el perfil**, que si no cumplían el perfil, **no se podía implementar el manual de puestos, el manual de puestos está vigente desde el mes de octubre del 2012**, pero nótese que si hay otros servidores públicos como ya lo dijo usted han intervenido y que a ellos y se les canceló la remuneración que establece el manual de puestos como servidor público siete haciendo las mismas funciones que realizaron mis patrocinadas. Ahora bien también, el mismo ministerio de Educación a través de talento humano de planta central ha dicho que se ha legalizado los trasposos de puesto y partida presupuestaria, **nótese señor juez que el ministerio de Educación expide el acuerdo ministerial 0006-2014, donde se dispone el cierre de las colectorías**, mis patrocinadas al dejar de ser colectoras evidentemente pasan a ser administradoras circuitales, pero les hacían pasar a ser administradoras circuitales antes de que se expida ese acuerdo ministerial bajo la figura de encargo, es decir con esa figura ellas asumen funciones de administradoras circuitales, luego viene el acuerdo **ministerial 0006-2014 donde se dice que hasta el 31 de octubre de 2014 se tiene que ejecutar en este caso el cierre de las colector y eso que quiere decir señor juez que mis patrocinadas estaban destinadas a estar bajo la figura de encargo como administradoras circuitales de desde enero de 2014 hasta el 31 de octubre de 2014 sin embargo a ellas se las tuvo por varios años bajo la figura de encargo** y recién en el año 2018-2019 se acordaron de hacer o legalizar supuestamente el traspaso del puesto y partida presupuestaria, **pero no se hicieron los informes técnicos como establece el artículo 37 de la Losep y el artículo 69 de su reglamento General que básicamente dice que se tienen que elaborar los informes técnicos de talento humano y hacerse las reformas en el distributivo de remuneraciones**, estas comisiones evidentemente generaron lesiones de derechos de orden constitucional porque quedaron privadas mis patrocinadas de recibir la remuneración que corresponde al puesto que se les encargó en un inicio y que bajo la figura de traspaso y puesto de partida presupuestaria se le tenía que cancelar la remuneración como administradoras circuitales, **entonces la administración pública no ha justificado porque no se dio cumplimiento a lo que establece el artículo dos del acuerdo ministerial 0006-2014** esto es el traspaso de puesto y partida presupuestaria. Pregunté al técnico de talento humano si hay los informes técnicos y me ha dado una respuesta satisfactoria entiendo que no existen esos informes, además señor juez debo indicar que la Corte Constitucional ha sido muy enfática en indicar que ante idénticas funciones pues se les debe dar el mismo trato a los servidores públicos a las personas trabajadoras y que al darle un trato diferenciado este debe ser justificado, en cuanto tiene que ver al hecho de que en la Corte Provincial de justicia de Cotopaxi hay un caso análogo resuelto tengo conocimiento señor juez yo presente esa acción de protección pero ya estamos para presentar una acción extraordinaria de protección y también debo indicar que en la provincia de Chimborazo, **en el juicio, justo el impreso está en el proceso**,

Nro. 06171-2021-00020 el ministerio de Educación interpuso una acción extraordinaria de protección en contra de esta sentencia de un caso análogo al que estamos tratando y la sala de inadmisión de la Corte Constitucional inadmitió dicha acción, entonces señor juez no hay justificación alguna aportada por parte del ministerio Educación para que se diga por qué no se les dio el mismo trato que a otros servidores públicos y ojo pese a que hubo la circular 00043-2014 donde expresamente planta central les decía a los distritos educativos que todo ingreso al distributivo de remuneraciones tenía que guardar concordancia con el manual de puestos aquí no hay concordancia porque se le seguía cancelando una remuneración de un puesto que ya había desaparecido y otra cuestión planta central a través de la circular 00037 me parece que es del 27 de febrero de 2015 dispone a los distritos educativos en su numeral cuatro como se tiene que cancelar el 100% de las numeraciones por los encargos, tampoco el ministerio de Educación aquí ha presentado un informe o una circular o alguna norma que haya dejado sin efecto esa disposición entonces no entendemos porque no se acató dicha disposición todas estas comisiones evidentemente generaron lesiones de derechos de orden constitucional sin embargo debo indicar también que a criterio del ministerio Educación no se las se reclasifica como realmente merecían, es decir, cumplían con la experiencia, cumplían con los perfiles esto es los títulos académicos todo cumplían sin embargo no las reclasifica como SP7 acude a la justicia ordinaria y la justicia ordinaria les da la razón y por esa razón les reclasifica ordena que se clasifiquen como SP7 entonces aquí viene la cuestión del hecho de que el ministerio de Educación dice que la acción de protección no es la vía adecuada y eficaz, nótese que al momento de hacerse la reclasificación a través de una sentencia de los jueces de lo contencioso y administrativo no le mandan a pagar desde el momento que se les reclasifica si no desde el momento en que se ejecutoria la sentencia, y por esa razón señor juez no es eficaz la vía ordinaria o caso contrario hubiéramos ido la vía ordinaria y hay casos parecidos en donde los jueces de lo contencioso administrativo ordena el pago de las remuneraciones faltantes pero desde 90 días antes a la presentación de la demanda...”

.IV. CONSIDERACIONES DE LA JUDICATURA CONSTITUCIONAL

12.- COMPETENCIA Y VALIDEZ. El suscrito juez es competente conforme a la constitución (Art. 167 (CRE)) y la ley “Art. 1 y 7” de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (LOdGJyCC), pues la acción y omisión de la entidad estatal ha producido aquí en esta circunscripción territorial sus efectos. Recaltar además que no se ha impugnado la competencia del juzgador. A la presente acción de garantías jurisdiccionales, se le dio el trámite previsto en los artículos 8, 13, 14 y 17 de la (LOdGJyCC), razón por la cual se garantizó el cumplimiento del principio de tutela judicial efectiva habiéndose declarado su validez procesal en razón no haberse omitido solemnidad que pueda afectar a su validez.-

13.- DE LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN Y SU NATURALEZA.- La acción de protección está reconocida en el artículo 88 de la Constitución de la República como una garantía jurisdiccional, tiene por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución ante cualquier vulneración de los mismos (por acción u omisión) por parte de una autoridad pública no judicial, o de los particulares en los casos señalados en la Constitución y la ley^[2]. Su faz inversa (causas de improcedencia) la misma norma las regula

en el Art. 42 de la (LOdGJyCC) es decir: “1. Cuando de los hechos no se desprenda que existe una violación de derechos constitucionales. 2. Cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. 3. Cuando en la demanda exclusivamente se impugne la constitucionalidad o legalidad del acto u omisión, que no conlleven la violación de derechos. 4. Cuando el acto administrativo pueda ser impugnado en la vía judicial, salvo que se demuestre que la vía no fuere adecuada ni eficaz. 5. Cuando la pretensión del accionante sea la declaración de un derecho. 6. Cuando se trate de providencias judiciales. 7. Cuando el acto u omisión emane del Consejo Nacional Electoral y pueda ser impugnado ante el Tribunal Contencioso Electoral”. Por otra parte la tramitación de la acción de protección, en su naturaleza de garantía jurisdiccional, debe darse a través de un proceso sencillo, rápido y eficaz, es decir libre de requisitos formales rígidos para ofrecer de manera ágil y dinámica, una protección efectiva y oportuna al titular del derecho presuntamente afectado “Dentro de la acción de protección el juzgador debe tener un rol proactivo comprometido a verificar de una manera eficaz las presuntas vulneraciones a derechos constitucionales, tomando el ordenamiento jurídico y la realidad social como su fundamento, en este sentido, el juzgador o juzgadores deben sustanciar el proceso, con un adecuado recaudo probatorio para juzgar con veracidad la existencia o no de vulneraciones a los derechos constitucionales^[3]

14.- La acción de protección no constituye una garantía de carácter residual de las diferentes vías de impugnación ordinarias, no se debe requerir el agotamiento de ningún mecanismo judicial ni administrativo^[4], ni tampoco exigir el agotamiento de otras vías o recursos para poder ser ejercida^[5], sino que es una acción directa e independiente, cuyo objeto es el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución.

4.1.- PRUEBAS ANUNCIADAS Y PRACTICADAS.

15.- En la demanda de Acción de Protección, así como en la audiencia pública llevada a cabo en la presente causa conforme lo dispuesto en el Art. 16 de la LOGJCC, se anunció y practicó como pruebas, lo siguiente:

16.- Prueba anunciada, presentada y practicada por la legitimación activa: **Documental de la ciudadana ELSI LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ**, copias certificadas de las acciones de personal:

a).- Número 002658 de fecha 1996 que obra a fs. 3, en el que consta que ingresa al Servicio Civil al departamento de colecturía (colectora1) de la división colegio Agrop. Gral. Rumiñahui.

b).- Nro. 180-DZTH-CZ3 de fecha 9 de enero del 2014 donde se le encarga el puesto de **ADMINISTRADOR DE CIRCUITO EDUCATIVO** del colegio intercultural bilingüe General Rumiñahui con una remuneración de 817.00 USD; ver fs. 4.

c).- Nro. 155-DDTH-2016, de fecha 19 de septiembre del 2016, fs. 5, donde de igual modo se le encarga del cargo de **ADMINISTRADOR DE CIRCUITO EDUCATIVO 06D04C02_a VILLA LA UNION, nombramiento que rige a partir del 26 de agosto del 2016**, con una remuneración de 817.00 USD.

d).-Nro. 060-DD-TH-2019 de fecha 27 de febrero del 2019 **que se dice regir a partir del 1 de septiembre del 2014**, ver fs. 6, donde se establece que dicha acción de personal **corresponde a la legalización del nombramiento por traspaso de puesto y partida presupuestaria**. Que funciones va a realizar, pues la que venía ostentando, es decir, de administrador circuital. Cuál es la remuneración a recibir, pues la misma de 817.00 USD.

e).- Nro. 171 de fecha 24 de junio del 2019 que se dice rige en cambio desde el 1 de junio del 2019, acción de personal que se dice se realiza por ***“revisar la clasificación y cambio de denominación del puesto fijo por implementación del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del ministerio de Educación”***. Qué funciones va a realizar, pues la que venía ostentando, es decir, de administrador circuital. Cuál es la remuneración a recibir, pues con esta acción de personal se le incrementa al valor de 901.00 esto en calidad de servidor público 2.

f).- Nro. 236 de fecha 27 de mayo del 2020 que rige desde la misma fecha en referencia donde se le encarga el puesto de Analista Distrital de Gestión de Riesgos con la remuneración igual a la señalada en el literal anterior (901.00 USD).

g).- Nro. 331-UATH-06D04-2022 de fecha 28 de julio del 2022, que rige desde el 22 de agosto del 2022, ver fs. 9, donde se le ha procedido a ***“revisar la clasificación y cambio de denominación del puesto fijo por implementación del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del ministerio de Educación”*** esto por sentencia judicial en la causa Nro. 18803-2019-00396, donde por el mismo cargo de administrador circuital se le recategoriza como servidor público 7 con una remuneración de (1.676,00 USD). Consta además la acción de personal Nro. 421-UATH-06D04-2022 de fs. 10 donde el mismo ministerio corrige el lapsus cometido en la acción de personal anteriormente señalada (fs. 9), indicando que la decisión judicial en la causa Nro. 18803-2019-00396 se ha ejecutoriada en fecha 12 de abril del 2022 por lo cual desde ahí deben correr los rubros dispuesto por el órgano jurisdiccional.

j). De fs. 11 a 18 constan en copias certificadas formularios para la evolución del desempeño de la accionante de los peritos 2016 y 2017 donde obtiene el puntaje de 86.6 y 88.3 correspondiendo a la categoría de **muy bueno**.

k).- De fs. 19 consta la certificación de los cargos y encargos ostentados por la legitimación activa en el ministerio de Educación. Por otra parte constan a fs. 20 a 39, historial del tiempo que trabaja en el ministerio de Educación así como el resumen de sus aportaciones ante el IEES.

17.- En respecto de la ciudadana **Fanny del Rocío Abarca Abarca**, copias certificadas de las acciones de personal:

a).- Nro. 002929 de fecha 17 de diciembre de 1986, para ocupar el cargo de Colectora 1 en Joyagshi-Chunchi en el ministerio de Educación (ver. Fs.40).

b).- De fs. 41 consta la acción de personal que rige a partir del 1 de febrero del 1991 donde se le otorga el puesto a la accionante para el cargo de Colector 2 en el colegio Duchicela Shiry XII.

c).- La acción de personal Nro. 183-DZTH-CZ3 **de fecha 9 de enero del 2014** donde se le encarga del cargo de Administrador de Circuito Educativo, con una remuneración de **901 USD**, cargo que lo debe desempeñar en el Instituto Tecnológico Superior Duchicela Shyri XII (ver. Fs. 42)

d).- La acción de personal Nro. 153 DDTH-2016 de fecha 19 de septiembre del 2016 que rige a partir del 26 de agosto del 2016, donde le otorgan el **encargo de** Administrador de Circuito Educativo 06D04C03_b Columbe (e) con la misma remuneración de (901.00 USD).

e).- La acción de personal que obra de fs. 44, signada con el nro. 049-DD-TH-2019 de fecha 27 de febrero del 2019 y **que rige a partir del 1 de septiembre del 2014** con la misma remuneración de (901.00 USD).

f).- De fs. 45 consta la acción de personal signada con el número 170 de fecha 24 de junio del 2019 que rige a partir del 1 de junio del 2019 donde proceden a “ ***revisar la clasificación y cambio de denominación del puesto fijo por implementación del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del ministerio de Educación***”. Qué funciones va a realizar, pues la que venía ostentando, es decir, de administrador circuitual. Cuál es la remuneración a recibir, pues con esta acción de personal se le incrementa al valor de 901.00 esto en calidad de servidor público 2.

g).- Acción de personal Nro. 270-UATH-06D04-2021 de fecha 20 de diciembre del 2021 que rige desde el 1 de junio del 2021, donde se le ha procedido a “ ***revisar la clasificación y cambio de denominación del puesto fijo por implementación del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del ministerio de Educación***” esto por sentencia judicial en la causa Nro. 18803-2019-00394, donde por el mismo cargo de administrador circuitual se le

recategoriza como servidor público 7 con una remuneración de (1.676,00 USD).

j). De fs. 47 a 54 constan en copias certificadas formularios para la evolución del desempeño de la accionante de los peritos 2016 y 2017 donde obtiene el puntaje de 86.3 y 86 correspondiendo a la categoría de **muy bueno**.

k).- De fs. 55 consta la certificación de los cargos y encargos ostentados por la legitimación activa en el ministerio de Educación. Por otra parte constan a fs.56 a 68, historial del tiempo que trabaja en el ministerio de Educación así como el resumen de sus aportaciones ante el IESS.

- Por otra parte ambas accionantes proponen como prueba a su favor a resolución Nro. MRL-2012 suscrita por el ministro de Relaciones laborales donde se resuelve sustituir las remuneraciones mensuales unificadas para los servidores públicos (ver fs. 69).
- De fs. 70 a 80 consta la resolución Nro. MRL-FI-2012-0640 de fecha 10 de octubre del 2012, que rige a partir del 14 de septiembre de 2012 donde se expide el Manual de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos del Ministerio de Educación e incluirlos en el sistema de Clasificación de Puestos de Servicio público; **donde en dicho manual consta que el administrador del circuito educativo es catalogado en el grupo ocupacional Servidor público 7 grado 13 (ver fs. 79 vlta).**
- De fs. 99 a 103 consta el Print de pantalla. Distributivo de remuneraciones del MINEDUC. Remuneraciones percibidas por administradores circuitales del ministerio de Educación con contratos de servicios ocasionales **diciembre de 2015**.
- Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2014-00043-C de fecha 22 de mayo del 2014 que consta fs. 104, **donde se establece que existen errores en el distributivo de remuneraciones**, por lo que dispone la Coordinación de General de Administrativa y Financiera del ministerio de Educación, **entre otras cosas que todo ingreso de servidor tiene que estar de acuerdo con el manual de descripción Valorada y Clasificación de Puestos del ministerio de Educación**.
- Contratos de servicios ocasionales de fs. 105 a 110 de dos ciudadanos que a la fecha que las legitimadas activas ostentabas sus encargos, los dos ciudadanos contratados por el mismo ministerio de Educación percibían una remuneración mayor y acorde al cargo de administradores circuitales.

18.- Prueba de la parte accionada, el ministerio de Educación. La parte accionada adjuntó:

- Las sentencias que obran de fs. 226 a 272
- El testimonio de la dirección de Talento Humano del ministerio de Educación, nos referimos al ciudadano ING. ANGEL VIRGILIO DOMINGUEZ VALLEJO.

V.- CUESTIÓN PREVIA.

19.- Los problemas jurídicos resultan o deben ser contestados en relación a las alegaciones de las partes^[6]. No está por demás señalar **que se contestan los argumentos relevantes de las partes**. Los argumentos de las partes son especialmente relevantes cuando apuntan a resolver el problema jurídico.^[7]

20.- De los argumentos relevantes, señalamos que los legitimados pasivos, el único argumento relevante que se atacó en esta acción fue **en relación a que el suscrito juez no es competente** para conocer la presente acción, **esto en razón de que los argumentos expuestos por las legitimadas activas son alegaciones de índole laboral y que para ello está diseñada la justicia ordinaria**, en sí, el ministerio de Educación alegó y con fundamento la sentencia Nro. **1679-12-EP/20 del 15 de enero de 2020 de la Corte Constitucional** qué: “mayoría de los conflictos laborales quieren probar una serie de hechos usualmente relacionados a la fecha de inicio una relación laboral, duración de dicha relación remuneración que perciban o que percibía el trabajador estos procesos pueden requerir un mayor espacio de práctica de contradicción de la prueba aquel permitido en el trámite de la acción de protección, esto implica que cuando las alegaciones planteadas en estos casos concretos se ha diseñado se determina el diseño procesal es el juicio laboral ordinario por un medio procesal más adecuado para la tutela de derechos”.

21.- Además indicaron que la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi en la causa 05307202300050 (ver fs. 275-282) ya ha rechazado este tipo de causas con el mismo tipo patrón fáctico.

22.- **Mientras que la legitimación activa**, señala que se acepte esta acción tomando en consideración que no se están atacando directamente temas de legalidad sino vulneración de derechos constitucionales, entre ellos, el derecho al trabajo en el componente de una remuneración justa y equitativa; el derecho y principio de igualdad formal y material así como el derecho a la seguridad jurídica.

23.- Indica además que en este cantón y además en la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo -en las dos salas provinciales- ya han aceptado este tipo de causas y con el mismo patrón fáctico, por lo que pide sean tomadas en consideración esas resoluciones (ver fs. 81 a 98).

24.- En relación a los legitimados pasivos y sus dichos señalamos. Los legitimados pasivos no han emitido un argumento completo en sus alegaciones, realizando **un “argumento a**

contrario” de lo que se considera un argumento mínimo completo por parte de la Corte Constitucional, es decir, si la faz de acusación (faz positiva) debe reunir al menos, los siguientes tres elementos: [...] la afirmación de que un derecho fundamental se vulneró (**la tesis**), el señalamiento de la acción u omisión ...que habría ocasionado la vulneración (**la base fáctica**) y una justificación que muestre por qué la acción u omisión acusada vulnera el derecho fundamental en forma directa e inmediata (**la justificación jurídica**)^[8]. La faz negativa, es decir, la alegación de los accionados debe lograr destruir ese argumento mínimamente completo de la acusación. No es de olvidar además que: “los hechos alegados por las partes deben probarse, pero cuando se trata de garantías jurisdiccionales presentadas en contra de entidades públicas, la carga de la prueba se invierte, y son las instituciones públicas las que deben demostrar que lo alegado por los accionantes no ha sucedido, siempre que de otros elementos de convicción no resulte una conclusión contraria. Lo mismo sucede si las entidades públicas no suministran la información solicitada. Aunque la institución no fuere la demandada en determinado caso, de ser requerida con el aporte de elementos relevantes que sirvan para determinar la existencia de la violación alegada, ella está obligada a aportarlos y, de no hacerlo, resulta aplicable la inversión de la carga probatoria.”^[9]

25.- Señala el ministerio de Educación, que el suscrito juez no es competente para conocer la presente acción pues se está atacando temas netamente laborales, y que para ello esta diseñada la justicia ordinaria. Su cono de fuerza de alegación radica en el precedente contentivo en la sentencia **1679-12-EP/20** del 15 de enero de 2020 emitido por la Corte Constitucional y al sentencia de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi en la causa 05307202300050.

26.- Para esto debemos señalar que lo alegado por las ciudadanas ELSI LUCRECIA GUADALUPE SANCHEZ RAMIREZ Y FANNY DEL ROCIO ABARCA ABARCA, son violaciones a derechos constitucionales, entre ellos el derecho al trabajo en el componente de una remuneración justa y equitativa; el derecho y principio de igualdad formal y material así como el derecho a la seguridad jurídica y motivación. Debemos recordarle a los legitimados pasivos **que la competencia en una acción de protección no depende de la calidad del acto que se impugna**. Así, en sentencias como la N° 307-10-EP/19, del 9 de julio de 2019, la Corte Constitucional del Ecuador ha señalado:

“21. Respecto del argumento del accionante relacionado con la falta de competencia por tratarse de un acto administrativo, esta Corte considera que la naturaleza jurídica del acto no determina la competencia de los jueces al conocer una acción de protección, sino que el fundamento de la demanda sea la existencia de una vulneración de derechos constitucionales como sucedió en el presente caso [...]”^[10]

27.- Para determinar si la pretensión de las accionantes plantea o no una cuestión de mera legalidad, es preciso que el suscrito operador de justicia emita un juicio sobre si se violó o no un derecho fundamental. Un juicio tal, responde, en los términos de la más alta magistratura Constitucional del Ecuador, a uno de los dos problemas jurídicos sustantivos y centrales de

toda acción de protección: el de si se vulneró o no un derecho fundamental (el otro es el de cuál debe ser la reparación, en caso de vulneración)^[11]. Por tanto, el discernimiento de si la pretensión plantea o no un asunto de mera legalidad (causal de improcedencia establecida en el art. 42.3 LOGJCC) jamás puede repercutir en la determinación de la competencia o incompetencia del juez constitucional para conocer y resolver una acción de protección; por el contrario, aquel discernimiento presupone que quien lo haga debe ser un juez competente. La cuestión de la “competencia”, entonces, es previa a la de la “mera legalidad”^[12].

28.- Por lo señalado, no es posible establecer la incompetencia para tramitar una acción de protección en función de que la cuestión a resolver sería un asunto de mera legalidad, en este caso temas de índole laboral relacionados a la justicia ordinaria, pues **“aquello es precisamente lo que debe dirimirse al momento de resolver la procedencia de la demanda, bajo el presupuesto de que quien lo hace es un juez competente”**^[13].

29.- En este mismo hilamiento de ideas, y pese que ya hemos expuesto nuestra postura en razón de la incompetencia alegada, lo cual rechazamos de plano por el tema de los derechos constitucionales alegados su violación y que deben ser analizados en el fondo. Se señala la incompetencia del suscrito juez, en función o como soporte la sentencia **1679-12-EP/20** del 15 de enero de 2020 emitido por la Corte Constitucional y al sentencia de la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi en la causa 05307202300050. La misma Corte Constitucional ha indicado en relación a los precedentes emanados por la Corte Constitucional, son vinculantes, y que la obligatoriedad sobre los mismos “se proyecta horizontalmente respecto de la propia Corte, y verticalmente, respecto de todas las demás autoridades jurisdiccionales”^[14]. Asimismo ha indicado que dentro del precedente judicial, en sentido estricto, **es preciso distinguir la ratio decidendi**, como el conjunto de razones que son esenciales para la justificación de lo decidido, y que incluso dentro la misma **“se debe identificar su núcleo, es decir, la regla en la que el decisor subsume los hechos del caso concreto para, inmediatamente, extraer la decisión”**^[15]. De tal forma, una regla de precedente “es aquella que es el resultado de la interpretación del ordenamiento jurídico por parte del órgano decisor, por lo que no se desprende de manera directa de las disposiciones que conforman dicho ordenamiento”^[16]. Además la Corte Constitucional, en relación al como alegar un precedente en sentido estricto, ha señalado en sentencia N.º 1943-15-EP/21, párrafo 42 qué: **“dentro de la justificación jurídica, deben incluirse al menos los siguientes elementos: i. La identificación de la regla de precedente y ii. La exposición de por qué la regla de precedente es aplicable al caso”**.

30.- Bajo este contexto, se verifica que la situación jurídica conocida en la sentencia N.º 1679-12-EP/20 del 15 de enero de 2020, la cual devino en que el ciudadano Juan Elias Criollo Pallazhco planteó una acción de protección **contra la resolución dictada el 05 de noviembre del 2010 por el Inspector de Trabajo del Guayas, Hans Robles García, dentro del trámite de visto bueno No. 4198-2010**, iniciado por su empleadora, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP (en adelante, "CNT"). Dicha acción fue rechazada en primera

instancia y en segunda instancia fue aceptada. De ello es que la Corte Constitucional bien hizo en referencia de que estos aspectos, en relación al visto bueno y su impugnación en sede constitucional no cabían, pues son temas de índole laboral la reparación de derechos laborales, pero el mismo precedente que invocan los legitimados pasivos guarda una excepción que debe ser tramitada en vía constitucional como es el caso cuando existiría **discriminaciones**, es decir, cuando las pretensiones escapen de la mera determinación de haberes patrimoniales como el puesto a nuestro conocimiento. Así dicho precedente en el párrafo 68 señala:

“En primer lugar, como ya se mencionó, la vía laboral ordinaria es adecuada para la reparación de derechos laborales ya que ha sido diseñada específicamente para salvaguardar los derechos del trabajador y equiparar su situación a la de su empleador. **Sin embargo**, pueden existir controversias que tienen en su origen un conflicto laboral en el cual se ha emitido una resolución de visto bueno, **pero las actuaciones en contra de los trabajadores han afectado otro tipo de derechos. Esto ocurriría en casos tales como situaciones de discriminación**, esclavitud o trabajo forzado, afectaciones al derecho a la integridad personal de los trabajadores y, en general, cuando los hechos demuestren que las actuaciones de los empleadores han afectado otros derechos más allá de los derechos laborales de los accionantes. Es decir, cuando las pretensiones escapen de la mera determinación de haberes patrimoniales”.

31.- Como vemos la sentencia 1679-12-EP/20 del 15 de enero de 2020, **no contiene las mismas propiedades relevantes** como lo ha señalado la misma Corte en sentencia 487-16-EP/22 del 13 de abril del 2022, nada tiene que ver con los temas alegados y expuestos por los hoy legitimados; tratan específicamente de temas de impugnaciones de vistos buenos que han sido aceptados por inspectorías de trabajo y que lógicamente tiene su sede impugnatoria en la justicia ordinaria (Art. 183 del Código de Trabajo). Para una mejor comprensión además señalamos la parte medular del fallo:

“...25. En este caso, la Corte considera que el tribunal actuó arbitrariamente al desnaturalizar la acción de protección, distrayéndola de su objeto, lo que acarreó una vulneración de derechos fundamentales, conforme al estándar citado en el párr. 21 supra. ***Esto, por cuanto la prescripción de la acción para solicitar el visto bueno es una razón típica para impugnarlo ante la jurisdicción laboral (conforme al inciso final del artículo 183 del Código del Trabajo) y la razón esgrimida por el tribunal de apelación para considerar ineficaz a tal jurisdicción inobserva el ordenamiento jurídico-laboral. Así, es evidente que, en este caso, la controversia sobre la oportunidad o no del visto bueno no podía dirimirse a través de una acción de protección. Además, el efecto de estimar la impugnación de un visto bueno concedido por un inspector de trabajo es la configuración de un despido intempestivo, lo que trae como consecuencia el pago de una indemnización.*** El tribunal reconoce la vigencia de este régimen legal, pero prescinde de él expresamente y, **con ello, usa la acción de protección como instrumento para eludir los efectos prescritos en la ley y ordenar otros distintos: la ineficacia del despido y la reincorporación del trabajador.**

32.- Lógicamente estos temas de prescripción de sanciones, pagos de haberes laborales por incumplimientos contractuales, sanciones por despido intempestivo tienen su razón de ser en la justicia ordinaria. Pero además no olvidemos que hasta en los temas de los vistos buenos se

ha señalado que existen excepciones que deben ser tramitadas en sede constitucional, como es el caso de los temas relativos a derechos constitucionales como es la **discriminación como los hoy alegados**. Además de ello, como se dijo en audiencia, no solo el precedente que hicieron alusión los legitimados activos trata de estos temas sino por ejemplo las sentencias No. 253-16-EP/21 y Sentencia No. 1855-12-EP/20 y sin embargo de ello, la regla precedente de todas las sentencias señaladas no tiene su núcleo esencial en el sentido de que toda impugnación de visto bueno no cabe en sede constitucional, muestra de ello es la sentencia No. 878-11-EP/20 y la Sentencia No. 1329-12-EP/22, donde en esta última se señaló: “Ajuicio de esta Corte, la acción de protección se desnaturaliza tanto cuando se la utiliza para el planteo de cualquier litis, como cuando se la rechaza de manera automática, argumentando la existencia de otras vías judiciales para el caso. *Por lo cual, la respuesta a la pregunta planteada no puede ser una afirmación absoluta respecto a si procede o no la presentación de una acción de protección en contra de una resolución de visto bueno*. Por el contrario, **ante cada caso particular**, lo necesario es considerar si para la impugnación del acto específico (resolución de visto bueno) existe una vía ordinaria adecuada y eficaz y si la existencia de esta vía con esas características impide la presentación de acciones de protección en contra de este tipo de actos.”^[17]

33.- Por las consideraciones expuestas, el argumento esgrimido por parte del ministerio de Educación, en razón de que el suscrito juez no es competente de conocer esta acción en razón de que se está alegando temas de índole laboral, no prospera, pues no se están alegando solo estos hechos, se están alegando temas relativos a la **discriminación** sufrida en los encargos encomendados en su situación laboral por varios años violentando el igual trato entre sus compañeros que realizaban la misma actividad laboral, discriminación laboral realizada por parte del ministerio de Educación.

34.- Finalmente para dar contestación al argumento que en la Sala Especializada de lo Civil, Mercantil, Laboral, de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial de Cotopaxi en la causa 05307202300050 ya se ha rechazado este tipo de acciones con el mismo patrón fáctico.

35.- Para contestar este tipo de argumento debemos señalar que la clasificación de los efectos de las sentencias en materia de garantías, pueden ser las siguientes: a) **Efectos inter partes**: es decir, que vinculan, fundamentalmente a las partes del proceso. b) **Efectos inter pares**: una sentencia de esta naturaleza supone que la regla que ella define debe aplicarse en el futuro, a todos los casos similares. c) **Efectos ínter comunis**: efectos que alcanzan y benefician a terceros que no habiendo sido parte del proceso, comparten circunstancias comunes con los peticionarios de la acción. d) **Estados de cosas inconstitucionales**, por la cual ordena la adopción de políticas o programas que benefician a personas que no interpusieron la acción de tutela^[18]

36.- En efecto, se verifica que la acción de protección Nro. 05307202300050 seguida en contra del ministerio de Educación ha sido rechazada; pero esta decisión es vinculante para las

partes (**inter partes**) lo “que implica que lo decidido solo tiene efecto en la causa y es aplicable solo para los justiciables”^[19] allí señalados. Es decir, que la sentencia solamente causará efectos a las personas que fueron partes procesales y no podrá extenderse más allá de aquellas. La sentencia en referencia no puede ser considerada de ningún modo un precedente **ni auto-vinculante ni hetero-vinculante** para el suscrito operador de justicia en los términos que ha señalado la ley (Art. 182 del COFJ) y nuestra Corte Constitucional^[20]. Además que el patrón fáctico de aquella sentencia no es del todo símil con nuestro caso, pues hace referencia a una servidora pública a quién le han separado de la institución por supresión de puesto conforme lo dispuesto el Art. 47 letra c) de la LOSEP y que además de los derechos alegados allí en esa causa también invoca complementariamente los derechos al igual trato e igual remuneración; tema dado respuesta en base a la sentencia 1679-12-EP/20, qué, como se dijo en líneas anteriores, en nada es pertinente dicha sentencia en el tema de decisión de esta causa, por lo que, con todo el respeto del caso a la magistratura provincial de Cotopaxi ese argumento **es inatínente**: “Hay inatínencia cuando en la fundamentación fáctica o en la fundamentación jurídica **se esgrimen razones que no “tienen que ver” con el punto controvertido**, esto es, no guardan relación semántica general con la conclusión final de la argumentación y, por tanto, con el problema jurídico de que se trate. **Dicho de otro modo, una inatínencia se produce cuando el razonamiento del juez “equivoca el punto” de la controversia judicial**^[21], por lo que tampoco este argumento prospera por este extremo desechándolo de igual modo.

37.- Dilucidados los cargos relevantes esgrimidos por la legitimación pasiva, y contestados aquellos, es menester referirnos a lo alegado por la legitimación activa, en razón de que tanto en nuestra provincia (Salas Provinciales) como en esta unidad judicial, con el mismo patrón fáctico y derechos constitucionales alegados, han sido aceptadas acciones de protección de este tipo.

38.- En efecto, las sentencias que obran a fs. 81 a 93, poseen el mismo patrón fáctico con la hoy materia de esta acción; inclusive la causa Nro. 06334-2023-00003 ha sido emitida por el suscrito operador de justicia, misma que ha sido confirmada por la Corte de Apelaciones de nuestra Provincia.

39.- Los operadores de justicia a nivel nacional debemos otorgar el mismo trato a todos los usuarios del sistema de justicia en similares procesos que lleguen a nuestro conocimiento, es decir, debemos tomar en consideración los patrones fácticos alegados y el raciocinio expuesto anteriormente por el o los operadores de justicia y aplicarlos en posteriores causas, esto efectiviza el derecho a la igualdad del trato procesal y precautelar la vigencia de nuestra decisiones. El magistrado constitucional, Dr. Alí Lozada, hoy presidente de la Corte Constitucional del Ecuador, cuya ponencia le correspondió en la causa No. 1035-12-EP/20, dejó sentado lo siguiente: “17. Los precedentes pueden ser, o bien, verticales, cuando provienen de una decisión judicial adoptada por un órgano jerárquicamente superior al de referencia, o bien, horizontales, cuando provienen de una decisión adoptada por un órgano del mismo nivel jerárquico que el de referencia. El argumento del accionante, entonces, invoca la

aplicación de un supuesto precedente horizontal. 18. Por lo que respecta a las decisiones judiciales adoptadas por los tribunales de las salas de las cortes provinciales (y otros órganos jurisdiccionales de instancia), la Corte observa que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no instituye el precedente horizontal hetero-vinculante. Aquella hetero-vinculatoriedad significa que el fundamento (centralmente, la *ratio decidendi*) en cuya virtud una decisión judicial ha sido tomada por los jueces que componen un cierto tribunal obliga a otros jueces del mismo tribunal que, en el futuro, tuvieren que resolver un caso análogo. Tal vinculación por los precedentes horizontales se verifica, por ejemplo, en la Corte Constitucional, cuyas decisiones vinculan a sus futuros integrantes. En el caso de los precedentes horizontales de la Corte Nacional, su carácter hetero-vinculante depende de que se satisfagan las condiciones establecidas en el artículo 185 de la Constitución y las disposiciones legales relacionadas; en caso contrario, se aplica lo mismo que para los precedentes de los tribunales de las salas de las cortes provinciales. 19. En opinión de la Corte, en cambio, *el precedente horizontal auto-vinculante es una necesidad racional y jurídica. Dicha auto-vinculatoriedad quiere decir que el fundamento (centralmente, la ratio decidendi) en cuya virtud una decisión judicial ha sido tomada por los jueces que componen un cierto tribunal obliga a esos mismos jueces cuando, en el futuro, tuvieren que resolver un caso análogo; de manera que dichos jueces pueden apartarse de su propio precedente solo si lo justifican suficientemente*. Esto es así porque, si bien un juez resuelve casos singulares, debe universalizar el fundamento de sus decisiones para casos análogos futuros: resultaría irracional y contrario al derecho fundamental a la igualdad formal si un juez que, en el caso A, ha dicho que debe hacerse X por darse las circunstancias 1, 2 y 3, posteriormente, en el caso B, sostuviera lo contrario ante esas mismas circunstancias y sin justificar su cambio de opinión”.

40.- Trazado este horizonte, debemos señalar que es por ello que le solicitados a la legitimación pasiva, en audiencia, se nos señale y argumente el por qué o cuál sería el argumento que justifique que nuestra Corte de Apelaciones cambie el criterio ya dado en las causas resueltas y aceptadas con el mismo patrón fáctico, nos referimos a las causas Nro. 061712021; 06282202200017 y la causa 06334-2023-00003.

41.- Argumentando el ministerio de Educación los temas ya analizados y rachados supra (párr. 24 a 38 de esta resolución); temas de índole laboral con fundamento la sentencia **inatinerante** Nro. 1679-12-EP/20. Mientras que PGE señaló, que aquellas sentencias de nuestra Corte Provincial son de carácter inter partes. No existiendo ningún argumento de validez esgrimido por parte de la legitimación pasiva conforme ya fueron contestados en forma motiva líneas anteriores; nos correspondería resolver el tema central y de fondo de la presente causa, en tal virtud el problema jurídico se plantea en los siguientes términos:

DEL ANÁLISIS DEL CASO EN EL FONDO.-

42.- ¿El pago remunerativo mensual que percibían las legitimadas desde que se les encargó la función de administradores circuitales; vulneró el derecho al trabajo en la esfera de la remuneración justa, seguridad jurídica, igualdad y no discriminación; al encontrarse

desempeñado dichos encargos cuando otros servidores públicos con nombramiento y por contrato, por la misma función, recibían una remuneración superior y acorde a la clasificación de SP7 grado 13, es decir, en comparación con otros servidores en igual condición?

EL DERECHO DE IGUALDAD FORMAL Y MATERIAL Y NO DISCRIMINACIÓN

43.- El derecho a la igualdad y no discriminación con sustento constitucional, se basa a lo consagrado en el Art. 66.4^[22] y 11.2^[23] de nuestra Constitución; pues se han indicado que a las accionantes, se le habría otorgado un trato diferenciado, que en lugar de proyectar el goce de sus derechos, los habría menoscabado; ello, en comparación con otros funcionarios que desempeñan la misma labor. En respecto de lo dicho la Corte Constitucional del país se ha pronunciado en relación a la igualdad y no discriminación señalado que:

“36) El derecho a la igualdad, en su dimensión formal y material, y la prohibición de discriminación se encuentran reconocidos en los artículos, 3 (1), 11 (2) y 66 (4) de nuestra Constitución y también se ha consagrado en instrumentos internacionales de derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo. De tal suerte que, **"los Estados deben abstenerse de realizar acciones que de cualquier manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o de facto "**. La no discriminación, junto con la igualdad ante la ley y la igual protección de la ley sin ninguna discriminación constituye un principio básico y general relativo a la protección de los derechos humanos. De tal manera que, constituye un principio erga omnes y de jus cogens y un derecho autónomo”^[24] (el énfasis es nuestro)

44.- Insistir como se dijo en el anterior fallo (00003); no solo la discriminación o la violación del derecho a la igualdad ataca a verificar un trato diferenciado o discriminatorio en relación a categorías sospechosas o protegidas^[25]. La diferenciación en el trato (violación al derecho a la igualdad formal y material) entre todos los ciudadanos integrantes del Estado no solo compete tal distinción, sino más bien, **todo trato desigual entre iguales**, merma de igual modo este derecho y principio.

45.- La Corte Constitucional del Ecuador ha indicado en este aspecto: “Dentro de la configuración normativa del derecho a la igualdad nos podemos encontrar con dos dimensiones: la denominada igualdad jurídica o formal y la igualdad de hecho o material. La primera de las mencionadas hace referencia a la igualdad ante la ley, es decir una igualdad en cuanto a la configuración y aplicación de normativa jurídica, **mientras que la segunda hará referencia a las particularidades de los sujetos**, grupos o colectivos, **quienes deben ser tratados de manera igualitaria si se encuentran dentro de circunstancias fácticas similares, prohibiéndose cualquier acto discriminatorio**^[26]. Por consiguiente, no solo es catalogado un trato discriminatorio los casos determinados en el Art. 11.2 de la CRE (categorías protegidas o protección sospechosa), sino por el contrario, son las particularidades de **“los sujetos”** frente a circunstancias fácticas similares quienes deben ser tratados en forma igualitaria para de esta manera no verificar algún tipo de trato discriminatorio prohibido

constitucionalmente, esto en los términos del Art. 66. 4 ibid. Más bien lo que sí ha distinguido la misma Corte de Cortes es que depende el nivel de examen o escrutinio que se haga en relación al caso y los sujetos en comparación lo que dependerá de la afectación de este trato desigualitario, así por ejemplo ha dicho:

“50. Ahora bien, como punto de partida en el análisis, es necesario que la Corte determine con base en qué criterios se efectúa la diferenciación, pues de ello dependerá si el nivel de escrutinio a ser aplicado será estricto o de mera razonabilidad. **Así, el nivel de intensidad en el escrutinio puede ser alto, medio, o bajo dependiendo del fundamento de la distinción.** El escrutinio es: (i) **bajo** cuando la distinción no se fundamenta en una categoría sospechosa o protegida; (ii) **medio** cuando se diferencia a partir de categorías protegidas, y (iii) **estricto o alto** cuando la distinción se basa en categorías sospechosas. **Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia. Sentencia No. 28-15-IN/21 de 24 de noviembre de 2021, párr. 147.** (nuestro es el énfasis)

46.- Lo mismo lo ha replicado en sentencia No. 1043-18-JP y acumulados/21 de 8 de diciembre de 2021, párr. 74 cuando ha dicho:

“Esta Corte también ha establecido que el nivel de escrutinio: “respecto de un trato diferenciado debe **ser mayor** cuando se trata de una categoría sospechosa de discriminación en la que se presume la inconstitucionalidad del trato; y cuando la distinción no se base en una categoría sospechosa o al menos sea una de las protegidas por la Constitución, **el escrutinio sobre la presunta distinción inconstitucional es uno de mera razonabilidad**”. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 1043-18-JP y acumulados/21 de 8 de diciembre de 2021, párr. 74.

47.- Dadas las circunstancias del caso y los hechos alegados por las legitimadas activas en el presente caso se realizará un examen o test de **mera razonabilidad**.

48.- Tres son los elementos que deben verificarse para configurar el trato discriminatorio: **primero**, la comparabilidad: tiene que existir dos sujetos de derechos que están en igual o semejantes condiciones; **segundo**, la constatación de un trato diferenciado por una de las categorías enunciadas ejemplificativamente; **tercero**, la verificación del resultado, por el trato diferenciado, y que puede ser una diferencia justificada o una diferencia que discrimina. La diferencia justificada se presenta cuando se promueve derechos, **y la diferencia discriminatoria cuando tiene como resultado el menoscabo o la anulación del reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos**^[27]

49.- En los hechos y el caso; existe prueba suficiente para realizar el test que determine si ha existido o no un trato desigual o discriminatorio; por lo que, se tomará en cuenta las acciones de personal de encargo de las legitimadas activas (**puesto de encargo**) (ver fs. 4 a 8 y de fs. 42 a 44) vs. el universo planteado de comparabilidad entre las personas contratadas en el mismo periodo de tiempo (ver fs. 105 a 110) así como el listado (print- distributivo de remuneraciones fs. 99 a 103); y se comparará la situación remunerativa con quienes desempeñan las mismas funciones.

50.- COMPARABILIDAD. La Corte Constitucional, refiere que los involucrados deben estar *en la misma o similares condiciones*; ello, en cuanto a sus funciones, atribuciones y responsabilidades, **siendo dicho encargo** de las dos legitimadas activas de ADMINISTRADOR (A) circuito educativo, esto justificado con las acciones de personal que obra de fs. (ver fs. 4 a 8 y de fs. 42 a 44) de los autos y esto dentro del periodo de tiempo del año **2014 al 01 de junio de 2019**.

51.- Si comparamos en forma primaria con los contratos de servicios ocasiones que constan a fs. 105 a 110 que corresponde a los años 2015 y 2017; por esos mismos cargos, es decir, de administrador circuital, se les canceló mensualmente a los ciudadanos ahí nominados la cantidad de (1676.00 USD) en calidad de servidores públicos SP7, valores que para esos mismos años 2015 y 2017 jamás a los legitimados activos se les canceló pese que tuvieron la misma función y cargo.

52.- Sí, por otra parte, también observamos, el print de pantalla de los servidores (fs. 99 a 103); también para o desde el año 2015 ya percibían algunos funcionarios y con el mismo cargo “**administrador circuital**” la remuneración de (1676.00 USD) a excepción de las hoy legitimadas activas. Dicho así, está justificado que los legitimados activos estaban en la misma condición que los ciudadanos comparados dentro del listado de contratados y del print de servidores del magisterio al ostentar el cargo de administradores circuitales.

53.- TRATO DIFERENTE.- Ante estos acontecimientos justificados, en la causa, tenemos que sin explicación, que conlleve sustento constitucional o legal alguno, a los accionantes, con las mismas funciones y cargos; se les ha cancelado en la periodicidad de los años 2014 hasta el 2019 rubros inferiores a los funcionarios que en igualdad de condiciones y cargos sí se les canceló ya desde que ocuparon dichos cargos, insístase, ver folios 105 a 110; así, se verifica en la causa un trato diferente, sin que exista una justificación lógica y razonable y pese que además, ya con fecha 27 de febrero del 2015, dispuso el ministerio de Educación el pago “**por encargo**” de los puestos a partir del año 2014, esto conforme el Art. 4 de la Circular Nro. MINEDUC-CGAF-2015-00037-C (ver fs. 111-121) que jamás ejecutaron los responsables del ministerio de Educación y por el cual indudablemente los hoy accionantes también eran beneficiarios.

54.- VERIFICACIÓN DEL RESULTADO.- el resultado en el presente análisis, lejos de promover derechos, (que se conoce como discriminación positiva) lo que hace es menoscabar, el reconocimiento y goce de los derechos como el de una remuneración justa a los accionantes; pues, pese que ellos se encontraban cumpliendo exactamente las mismas funciones “**analistas circuitales**”; cargo que también ostentan los otros funcionarios detallados o señalados en los documentos obrantes a fs. 105 a 110 y de fs. 99 a 103; se encontraban percibiendo como remuneración una cantidad menor, sin justificativo razonable o jurídico; por lo tanto frente a la observancia y justificación del test realizado; tenemos un trato diferenciado a los accionantes que menoscaba el derecho a la igualdad y no discriminación.

EN RELACIÓN AL DERECHO AL TRABAJO Y JUSTA REMUNERACIÓN:

55.- El derecho al trabajo es un derecho fundamental, reconocido en diversos instrumentos de derecho internacional. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 6, trata este derecho más extensamente que cualquier otro instrumento. El derecho al trabajo es esencial para la realización de otros derechos humanos y constituye una parte inseparable e inherente de la dignidad humana. Toda persona tiene el derecho a trabajar para poder vivir con dignidad.

56.- El derecho al trabajo tiene su esfera de constitucionalidad que contempla la justa remuneración; así lo ha manifestado la Corte Constitucional cuando ha señalado qué:

"De esta manera, ha de tenerse en cuenta que el derecho al trabajo, en su dimensión constitucional, que además es aquella vinculada con su núcleo esencial, se expresa a través del reconocimiento jurídico de justas remuneraciones y retribuciones, así como en el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado, conforme lo dispone el artículo 33 de la Constitución de la República; de igual manera, se encuentra integrado al núcleo duro del derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, conforme lo determina el artículo 34 de la Norma Suprema. (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nro. 14-15-SEP-CC. Caso 1783-11-EP)

57.- Sin embargo, la misma Corte de Cortes del Ecuador, ha sido más concreta y profunda en cuanto a la remuneración justa al exponer que: Es claro, por tanto, que el derecho al trabajo en la dimensión constitucional **incluye el reconocimiento jurídico de la justa remuneración.** (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia Nro. 249-18-SEP-CC)

58.- En lo relacionado a la remuneración justa y lo que debe ser entendido como tal, la misma Corporación Constitucional ha indicado:

"Este Organismo sobre el tema ya se ha pronunciado señalando que la remuneración justa constituye un elemento del derecho al trabajo que valora económicamente el esfuerzo físico e intelectual de las personas, **por lo que una afectación a ésta sin autorización, acarrea automáticamente una transgresión al derecho constitucional al trabajo**; así, también es un derecho que constituye a su vez un medio para el desarrollo del plan de vida de los trabajadores, por lo que se encuentra vinculado de manera muy estrecha con un elemento vital, como lo es la dignidad humana (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia No. 84-15-IN/20).

59.- De la prueba aportada en esta causa, tenemos en respecto de la ciudadana **Elsí Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramírez**, y conforme se verifica desde fs. 3 a 8, consta el detalle de las acciones de personal del referido ciudadano, en los que se verifica su relación laboral para con el ministerio de Educación y además los cargos ostentados de colector y de encargado de circuito educativo, así como las remuneraciones recibidas por dichos cargos. Además de fs. 19 consta el detalle de sus cargos ocupados dentro del ministerio de Educación y la periodicidad de los mismos. Resulta necesario señalar que ha dicha ciudadana recién y para el 12 de abril

del 2022 se le nombra ya en calidad de servidor público 7 y en calidad de administrador de circuito educativo conforme la certificación que obra a fs. 9 y 10 y pese que hasta la acción de personal que ejecuta la decisión estaba mal elaborada (fs. 9).^[28] Sí contrarrestamos esta certificación con el documento que obra a fs. 9 y 10, recién para esa data se homologa su salario a 1.676,00 USD, ya que recién a esa fecha se le da la calidad de servidor público 7 cuando **desde el 09 de enero del 2014 hasta el 11 de abril del 2022 estaba realizando y ejecutando las funciones de administrador de circuito educativo** (ver fs. 4 a 10); si bien desde 27 de septiembre del 2019 se procedió a su legalización de traspaso de partida y puesto (fs. 6) al cargo de administrador de circuito educativo, jamás y sin justificación razonada se le equiparó su sueldo acorde a su cargo y función, tuvo que esperar que para el año 2022 y por decisión judicial (fs. 10) se le homologue su sueldo acorde a sus funciones y cargos encomendados, pese que como se señaló supra, a algunos de sus compañeros de trabajo el ministerio de Educación ya les cancelaba el valor correcto y real acorde al mismo cargo y función que ostento la referida ciudadana.

60.- Por lo dicho efectivamente se evidencia que se ha violado el derecho al trabajo en el componente de una remuneración justada y equitativa en comparación con los otros servidores (ver. fs. 105 a 110 y de fs. 99 a 103) quienes encontrándose en igualdad de condiciones, realizando las mismas actividades que la legitimada activa, administradores de circuito educativo, percibían una remuneración muy superior a la hoy accionante sin ningún tipo de justificación alguna.

61.- Por “economía motivadora”^[29] señalamos en igual sentido la violación de dicho derecho, en relación a la ciudadana **Fanny del Rocio Abarca Abarca**, persona proponente en igual sentido de esta acción pues la referida ciudadana estaba en el cargo de **analista de distrito educativo** desde el 9 de enero del 2014 hasta el 26 de agosto del 2016 por **encargo**, ver fs. 42 y 43, y pese que desde 27 de febrero del 2019 (fs. 44), se procedió a su legalización de traspaso de partida y puesto, al cargo de administrador de circuito educativo, jamás y sin justificación razonada se le equiparó su sueldo acorde a su cargo y función, tuvo que esperar que para el año 2022 y por decisión judicial (fs. 46) se le homologue su sueldo acorde a sus funciones y cargos encomendados violentándose para ella de igual forma este tipo de derecho conforme en análisis anterior.

DERECHO A SEGURIDAD JURÍDICA:

62.-La Seguridad Jurídica se encuentra señalada como principio y derecho en el Art. 82 de la CRE. En varias sentencias^[30] de la Corte Constitucional de nuestro país se ha dicho que: “*para que se produzca una vulneración al derecho a la seguridad jurídica es necesario que las transgresiones normativas tengan una trascendencia constitucional consistente, sobre todo, en una afectación a uno o varios derechos constitucionales del accionante distintos a la seguridad jurídica, afectación que, el caso de los individuos humanos, han de suponer una merma significativa de su autonomía personal*” (nuestro es el énfasis). Por ello el análisis al final de esta resolución.

63.- De la seguridad jurídica ha dicho al Corte Constitucional^[31] que: “el administrado debe contar con reglas claras, estables y coherentes que le permitan tener una noción razonable del marco jurídico en que se desarrolla su accionar^[32]. Además ha indicado que este derecho contiene tres elementos: confiabilidad, certeza y no arbitrariedad. La confiabilidad está garantizada con la generación de normas, es decir, aplicando el principio de legalidad. En cuanto a la certeza, los ciudadanos deben estar seguros de que las reglas de juego no sean alteradas, para lo que se debe contar con una legislación estable y coherente, así como un conjunto de normas que hagan valer sus derechos. Y, finalmente, debe evitarse una posible arbitrariedad por parte de los órganos administrativos y jurisdiccionales en la aplicación de preceptos legales^[33]

64.- En relación a sus tres componentes señalamos: En cuanto a **La confiabilidad**: El legislativo con la anticipación debida ha creado normas para este tipo de casos y por ende su aplicación irrestricta, así tenemos que Ley Orgánica de Servicio Público señala:

“Art. 127.- Encargo en puesto vacante.- El encargo de un puesto vacante procede por disposición de la Ley o por orden escrita de autoridad competente. La servidora o servidor de la institución asume el ejercicio de un puesto directivo ubicado o no, en la escala del nivel jerárquico superior. El pago por encargo se efectuará a partir de la fecha en que se ejecute el acto administrativo, hasta la designación del titular del puesto”

65.- El Reglamento a la Ley Orgánica de Servicio Público, dispone en su Art. 21 qué:

“Del registro de otros movimientos de personal.- Los movimientos de personal referentes a ingresos, reingresos, restituciones o reintegro, ascensos, traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambios voluntarios, licencias y comisiones con o sin remuneración, sanciones, incrementos de remuneraciones, subrogaciones o encargos, cesación de funciones, destituciones, vacaciones, revisiones a la clasificación de puestos y demás actos relativos a la administración del talento humano y remuneraciones de la institución, se lo efectuará en el formulario "Acción de Personal", establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales, suscrita por la autoridad nominadora o su delegado y el servidor y se registrarán en la UATH o en la unidad que hiciere sus veces y en el Sistema Integrado de Información del Talento Humano y Remuneraciones administrado por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Las acciones de personal registradas se incorporarán al expediente de la o el servidor, y su custodia será responsabilidad de la UATH o de la unidad que hiciere sus veces.

La UATH o la unidad que hiciere sus veces, deberán reportar prohibiciones, inhabilidades e impedimentos legales de la o el servidor al Ministerio de Relaciones Laborales para registrarlo en el Sistema Integrado de Información del Talento Humano y Remuneraciones.

66.- Además, el Art. 271 *ibid.* manda a qué:

“Art. 271.- Encargo en puesto vacante.- El encargo en puesto vacante procederá cuando la o el servidor de carrera o no, deba asumir las competencias y responsabilidades de un puesto directivo ubicado o no en la Escala del Nivel Jerárquico Superior, y que cumpla con los requisitos establecidos en los Manuales de Clasificación Puestos Genérico e Institucional,

para lo cual y por excepción tratándose de casos que por las atribuciones, funciones y responsabilidades del puesto a encargarse, deban legitimar y legalizar actos administrativos propios de dicho puesto, siempre y cuando la o el servidor cumpla con los requisitos del puesto a encargarse. Los asesores únicamente podrán encargarse de puestos de igual o mayor jerarquía o con igual o mayor remuneración a la que se encuentre percibiendo.

El encargo en puesto vacante correrá a partir del primer día del ejercicio y hasta cuando dure el tiempo del encargo; los aportes al IESS serán los que corresponda al puesto encargado.

En caso de que la remuneración del puesto encargado fuere menor, percibirá la remuneración de mayor valor.

67.- En relación a este primer elemento, nos referimos a la confiabilidad, y al encontrarse justificado -los encargos- de las legitimadas activas, eran las normas Art. 127 de la LOSEP y Art. 271 del Reglamento a la LOSEP, las que se debían aplicar para dichos encargos; normas que jamás se señalaron en todas las acciones de personal que obran a fs. 4 y 5 y de fs. 42 y 43, es decir, se violentó el principio de legalidad en cuanto **principio**, al no aplicar por parte del ministerio de Educación “a los hechos” es decir a los -encargos-, el derecho, (norma) que estaba previamente establecido por normas claras, públicas y previas, violentándose el primer competente de la seguridad jurídica.

68.- De segundo competente, nos referimos “**a la certeza**”, es decir que: “*los ciudadanos deben estar seguros de que las reglas de juego no sean alteradas, para lo que se debe contar con una legislación estable y coherente, así como un conjunto de normas que hagan valer sus derechos*”. Las legitimadas activas al habérseles **encargado** un puesto dentro de la administración pública estaban seguros que en aplicación de la normativa vigente a la fecha *de sus encargos* se les debía aplicar dichas normas reglas de los Art. 127 de la LOSEP y Art. 271 del Reglamento a la LOSEP, y todo lo que involucraba con la aplicación de ello, es decir una paga justa y equitativa de acuerdo a sus nuevas funciones, cosa que no realizó el ministerio de Educación y más bien muy audazmente solo establecieron en dichas acciones de personal el postulado normativo del Art. 21 del reglamento a la LOSEP que hace referencia “Del registro de otros movimientos de personal” considerando que por medio de la sola invocación de dicho precepto legal se ocultaría la real acción de encargo que ostentaban en quebranto de sus legítimos derechos.

69.- Por último, en relación a la **Arbitrariedad**, es decir que: “las autoridades públicas están obligadas a respetar el ámbito de sus competencias apartando de su accionar cualquier intención de abuso que vaya en detrimento de los derechos de los administrados”^[34] En nuestro caso materia de análisis, el ministerio de Educación no respetó por el encargo ostentado por los legitimados activos, los Arts. 127 de la LOSEP y Art. 271 del Reglamento a la LOSEP., y esta violación de no aplicación normativa se tornó en abusiva y en detrimento de sus derechos tornándose arbitraria; es más, fue tan arbitrario el hecho y en detrimento de las accionantes el no aplicar la propia circular emitida por el ministerio de Educación Nro. MINEDUC-CGAF-2015-00037-C, de fecha 27 de febrero del 2015, al hacer el alcance a la

circular Nro. MINEDUC-CGAF-2015-0035-C del 11 de febrero de dicho año, en relación al pago de las remuneraciones pendientes del ejercicio económico 2015, cuando señaló qué: “(...) 4. La reforma por encargo en el año 2014, se debe ingresar para pagar los valores pendientes de pago del año 2014, para lo cual se recuerda que la reforma por encargo consiste en realizar el pago total por el encargo realizado de la siguiente manera: Cancelar el valor de la partida asignada al beneficiario (esto solo en caso de no haberse cancelado el año anterior) y el valor faltante cancelar con la partida del encargo, de tal manera que sumadas las dos partidas den un total del 100% que el beneficiario debe recibir por el encargo realizado, por ejemplo encargos directivos de establecimientos, jefaturas y NJS administrativos, y otros, de existir.”, documento que es suscrito por la Mgs. Inés Chavez, como Coordinadora General Administrativa y Financiera conforme se refleja a fs. 111 a 121 de los autos; por lo tanto dichos funcionarios del ministerio de Educación y por ende el mismo ministerio burlándose de sus competencias y de forma arbitraria no cumplieron con los preceptos normativos señalados y de esta forma mermaron los derechos que tenían las legitimadas al ostentar los encargos y percibir una remuneración justa en relación a sus actividades.

CONSIDERACIONES FINALES

70.- La motivación de una decisión judicial no depende de una determinada extensión puesto que esta, en ningún caso, supone un razonamiento judicial exhaustivo y pormenorizado de cada aspecto, ni un agotamiento exhaustivo de todos los argumentos posibles. Es perfectamente posible una fundamentación concreta^[35]; los argumentos expuestos por las legitimaciones pasivas constan resueltos en los acápites 24 a 38 de esta resolución, sin embargo, el responsable de talento humano, testigo del ministerio de Educación ING. ANGEL VIRGILIO DOMINGUEZ VALLEJO, además dijo en audiencia que no pudieron ser beneficiarias de este derecho inmediatamente las accionantes, pues no cumplían con los requisitos legales en su momento (**perfiles explícitamente señaló**), y por ello no existe afectación o merma de derechos. Este argumento también es irreal, pues como se verifica, las legitimadas no accedieron a este derecho por una errónea interpretación del ministerio de Educación en su momento, es por ello que el mismo Tribunal Contencioso competente les señaló en su momento:

“...No se encuentra asidero en el argumento del Ministerio de Educación de que no se consideró únicamente el nivel de conocimiento, de experiencia, de tiempo de servicio, de aptitudes personales, de atención al usuario, sino que también consideró la profesionalización del funcionario que pretendía ser favorecido con el proceso de reclasificación por estimar que así dispone el artículo 229 de la Constitución de la República, toda vez que al tenor del artículo 226 ibídem: “Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley.” Y en la especie el perfil de puesto no podía diseñarse a partir de una profesionalización proveniente de la obtención de títulos de cuarto nivel para el ejercicio de un cargo, como pretendía el Ministerio de Educación; sino que únicamente podía reclasificarse a la actora a base de la resolución que expida el Ministerio de Relaciones

Laborales con el fin de establecer la clasificación de puestos, su nomenclatura y valoración (artículo 163 del Reglamento a la LOSEP)." (véase en la Causa Nro. 18803201900396, sentencia de fecha 12/04/2022 16:17.

71.- Como corolario debemos señalar que uno de los principios básicos de la administración pública es la **"Interdicción de la arbitrariedad"**, principio por el cual: *"Los organismos que conforman el sector público, deberán emitir sus actos conforme a los principios de juridicidad e igualdad y no podrán realizar interpretaciones arbitrarias"* (Art. 18 del COA). Toma mayor refuerzo lo hoy dicho y analizado por el suscrito juez, que conforme se verifica de autos, si tan fuera cierto que no se les ha violentado derecho constitucional alguno a las accionantes, cosa que no lo es, es tan inverosímil lo señalado por los accionados, muestra de aquello es que cuando se les reclasificó por la **"nueva clasificación y cambio de partida"** a las accionantes (ver. fs. 6 y 44), al cargo de **"administradores de circuito educativo por implementación de del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos del ministerio de educación"**, en las acciones de personal en referencia con las cuales ejecutan dicha nueva reclasificación, **se hace referencia que éstas rigen a partir del 1 de septiembre del 2014**, entonces, sí esta reclasificación fue aprobada y entra en vigencia a partir del mencionado mes y año (2014), está por demás sobreentendido que dichas ciudadanas estaban en igualdad de condiciones vs. sus demás compañeros de trabajo a los cuales si se les otorgaba un trato preferente sin motivo alguno desde el periodo señalado por lo que cabe equiparar dicha desigualdad y discriminación justificada.

DECISIÓN:

72.- Con los antecedentes expuestos ha quedado justificado que las pretensiones de los accionantes se enmarca dentro de los presupuestos constitucionales y legales para su procedencia establecidos en de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; por consiguiente, el suscrito juez, **"ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LEYES DE LA REPÚBLICA"** acepta la acción de protección propuesta por las ciudadanas Elsi Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramirez y Fanny del Rocío Abarca Abarca y declara la vulneración por parte de la entidad accionada, ministerio de Educación, los derechos constitucionales de las accionantes como son: La seguridad jurídica; el derecho al Trabajo y justa remuneración y derecho a la igualdad y no discriminación.

1.- Como medida de reparación se dispone el pago de la diferencia salarial y compensaciones que por ley correspondan a las accionantes: **Elsi Lucrecia Guadalupe Sánchez Ramirez y Fanny del Rocío Abarca Abarca** por concepto de Remuneración Mensual desde el 09.01.2014 al 11.04.2022 y de la segunda prenombrada ciudadana desde el 09.01.2014 al 30.06.2021; pues en ese intervalo de tiempo no percibió la remuneración de (1.676,00 USD) sino una inferior. El monto será calculado en base a lo dispuesto en el Art. 19 de la LOGJCC, para lo cual se enviará suficiente despacho al Tribunal Contencioso Administrativo de la jurisdicción donde se aplicarían los precedentes de las sentencias Nro. 011-16-SIS-CC y No.

8-22-IS/22, valor que se calculará sin interés.

2.-Por interpuesto en el momento procesal oportuno, se concede el recurso de apelación propuesto por el ministerio de Educación; esto de conformidad con lo previsto en el Art. 24 de la LOGJCC; por lo tanto, por secretaría se procederá a enviar la causa ante la instancia superior, en donde las partes podrán hacer valer sus derechos. Sin costas ni honorarios que regular.

3.- Ejecutoriado en fallo cúmplase por secretaria con lo dispuesto en el Art. 86 número 5 de la Constitución de la República. Se debe dejar constancia además, que como se señaló en mandato anterior, la mora ocurrida en la notificación de la sentencia por escrito se debe a que desde el 23 de octubre al 24 de noviembre del presente año se le encargó al suscrito juez toda la unidad judicial mediante acción de personal Nro. 2546-DP06-2023-RM y varias más, inclusive se le encargó en esta misma periodicidad toda la unidad judicial del cantón Guamote, muy aparte que desde el 24 de noviembre al 1 diciembre del presente año se le concedió al suscrito licencia por estudios lo cual incumbió a que exista mora procesal en varias causas cuyo ponencia nos corresponde; lo que se deja constancia para los fines de ley pertinentes.- Habiéndose reintegrado en sus funciones actual el Ab. Heriberto López, secretario titular.- Cúmplase y notifíquese.-

-
1. [^] *La Corte Constitucional del Ecuador, en relación a la motivación dentro de decisiones en garantías jurisdiccionales ha dicho: “para una debida motivación dentro de decisiones expedidas en garantías jurisdiccionales, los jueces y juezas tienen la obligación de examinar pormenorizadamente si ha existido afectación de los derechos constitucionales de quien así lo alega; y, únicamente después de este análisis pueden concluir que la acción de protección no es la vía adecuada ni eficaz para la reclamación (Corte Constitucional, sentencia No. 342-13-EP/20, párr. 18.) Asimismo, esta misma corporación ha señalado que los juzgadores al motivar una sentencia de garantías jurisdiccionales deben, entre otros aspectos: “i) enunciar las normas o principios jurídicos en que se funda la decisión, ii) explicar la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho; y, iii) realizar un análisis para verificar la existencia o no de vulneración a los derechos, si en dicho análisis no se determina la existencia de vulneraciones a los derechos, sino más bien conflictos de índole infraconstitucional, le corresponde al juez determinar cuáles son las vías judiciales ordinarias adecuadas para la solución del conflicto (Corte Constitucional, sentencia No. 1285-13-EP/19, párr. 28.)*
 2. [^] *EL Art. 41 de la (LOdGJyCC) señala que procede la acción e protección: “1. Todo acto u omisión de una autoridad pública no judicial que viole o haya violado los derechos, que menoscabe, disminuya o anule su goce o ejercicio. 2. Toda política pública, nacional o local, que conlleve la privación del goce o ejercicio de los derechos*

y garantías. 3. Todo acto u omisión del prestador de servicio público que viole los derechos y garantías. 4. Todo acto u omisión de personas naturales o jurídicas del sector privado, cuando ocurra al menos una de las siguientes circunstancias: a) Presten servicios públicos impropios o de interés público; b) Presten servicios públicos por delegación o concesión; c) Provoque daño grave; d) La persona afectada se encuentre en estado de subordinación o indefensión frente a un poder económico, social, cultural, religioso o de cualquier otro tipo. 5. Todo acto discriminatorio cometido por cualquier persona.

3. [^] SENTENCIA N.º 392-16-SEP-CC CASO N.º 0907-12-EP.
4. [^] Sentencia No. 1186-15-EP/20.
5. [^] (Corte Constitucional. Sentencia 1754-13-EP/19 de 19 de noviembre de 2019, párr. 31.)
6. [^] Los problemas jurídicos son las preguntas que el razonamiento del juez busca responder para determinar qué decisiones deben adoptarse en cierto caso. Esas preguntas surgen, generalmente, de las alegaciones de las partes (ver. Sentencia No. 1158-17-EP/21 párr. 55.2)
7. [^] Ibid. párr. 87
8. [^] Véase, por todos, sentencias No. 1967-14-EP/20 de 13 de febrero de 2020, párr. 16 y 18. Sentencia No. 2467-17-EP/22.
9. [^] Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 116-13-SEP-CC, 11 de diciembre de 2013
10. [^] En el mismo sentido, sentencias N° 2152-11-EP/19 del 10 de septiembre de 2019, párr. 32, 739-13-EP/19, del 16 de octubre de 2019, párr. 28, y 603-14-EP del 30 de septiembre de 2020, párr. 21.
11. [^] sentencia N.º 1681-14-EP/20
12. [^] Ibid.
13. [^] Sentencia No. 227-16-EP/21 párr. 22.
14. [^] Corte Constitucional del Ecuador, Sentencia N°. 109-11-IS/20 del 26 de agosto de 2020, párr. 21
15. [^] Constitucional del Ecuador, Sentencia N°. 109-11-IS/20 del 26 de agosto de 2020, párr. 23
16. [^] Constitucional del Ecuador, Sentencia N°. 109-11-IS/20 del 26 de agosto de 2020, párr. 24.
17. [^] Sentencia No. 1329-12-EP/22 párr. 59.
18. [^] Sentencia Nro. 031-09-SEP-CC. CASO: 0485-09-EP página 9.
19. [^] Rafal Oyarte Martínez, *Derecho constitucional ecuatoriano y comparado*, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito, 2014, p. 868
20. [^] La Corte ha definido que los precedentes pueden ser (i) verticales, cuando provienen de una decisión judicial adoptada por un órgano jerárquicamente superior al de referencia; u, (ii) horizontales, cuando provienen de una decisión adoptada por un órgano del mismo nivel jerárquico que el de referencia. Estos últimos además pueden ser precedentes horizontales hetero-vinculantes o precedentes horizontales

autovinculantes, dependiendo de la relación de identidad que exista entre el órgano emisor del precedente y la autoridad judicial de referencia (Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia 1596-16-EP/21 de 08 de septiembre de 2021, párr. 31)

21. [^] *Sentencia No. 1158-17-EP/21 párr. 80.*
22. [^] *Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: (...) 4. Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.*
23. [^] *Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.*
24. [^] *Sentencia No. 1894-IO-JIV20*
25. [^] *Para una mejor comprensión y diferenciación entre categorías sospechosas diremos qué: “la constatación de un trato diferenciado por una de las categorías enunciadas ejemplificativamente en el artículo 11.2, que son categorías protegidas y que, cuando se utilizan para diferenciar, se denominan categorías sospechosas (véase en Corte Constitucional, Caso N. 11-18-CN). Además: “Las categorías sospechosas “son aquellas categorías utilizadas para realizar tratos “diferentes” respecto de ciertos grupos o personas vulnerables que no resultan razonables y proporcionales, cuyo uso ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a colocar en situaciones de desventaja o desprotección a grupos de personas generalmente marginados y que sin ser taxativos, se encuentran contenidos en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República”. Se presume la inconstitucionalidad de un trato diferenciado con base en estas categorías. Además, “aunque todas las categorías en el numeral 2 del artículo 11 de la CRE son categorías protegidas, no todas constituyen categorías sospechosas. Considerar que todas las categorías del artículo [11 de la Constitución] devienen en sospechosas, aunque daría la impresión de una mayor protección, desnaturalizaría la inversión de la carga probatoria y la necesidad de analizar que el trato diferenciado persiga un fin constitucionalmente imperioso”. Corte Constitucional del Ecuador. Sentencia. Sentencia No. 28-15-IN/21 de 24 de noviembre de 2021, párr. 143 y 147.)*
26. [^] *SENTENCIA N.0 019-16-SIN-CC CASO N.0 0090-15-IN*
27. [^] *Dictamen No. 1-18-RC/19*
28. [^] *Decimos mal elaborada pues se señala en dicha acción de personal que rige desde el 1 de agosto del 2022 cuando la sentencia causó estado en fecha 12 de abril del 2022 conforme consta en el acta de fs. 10.*
29. [^] *[...] existe un principio de la “economía motivadora”: no se explica lo obvio. Tan*

perturbador puede ser en ocasiones la penuria o pobreza motivadora como una acumulación agotadora de argumentos que se van amontonando y pueden llegar a aturdir por su obviedad, dificultando el hallazgo de los puntos clave, los puntos realmente controvertidos” (STS 290/2014, de 21 de marzo de 2014, Fundamento Jurídico Décimo Tercero) Tomando de la Sentencia No. 2355-16-EP/21.

30. [^] Ver por ejemplo: Sentencia No. 1763-12-EP/20. Sentencia No. 804-15-EP/20. Sentencia No. 237-15-EP/20.
31. [^] Sentencia No. 1245-14-EP/20. Sentencia N.º 1039-13-EP/20.
32. [^] (Corte Constitucional, sentencia N° 989-11-EP/19.)
33. [^] (Sentencia No. 10-12-SIN-CC dentro del caso No. 20-10-IN.)
34. [^] Párr. 35 Sentencia No. 1313-14-EP/20
35. [^] (Corte Constitucional del Ecuador, sentencia No. 1901-13-EP/19, párr. 24).

ANGUIETA PEREZ MARCO ANIBAL

JUEZ(PONENTE)